



# **BOLETIN DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

---

Año 15

Número 22

Enero-Abril 2005

---

## **C O N T E N I D O**

- I. PRESENTACION .....**
- II.- LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.....**
- III. REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.....**
- IV.- JURISPRUDENCIA .....**

<http://tribunalcontenciosobc.org>

**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

**I N T E G R A C I O N**

**LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ**  
MAGISTRADO PRESIDENTE Y TITULAR DE LA  
SEGUNDA SALA.

**LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR**  
MAGISTRADA NUMERARIA TITULAR DE LA  
PRIMERA SALA

**LIC. FLORA ARGUILES ROBERT**  
MAGISTRADA NUMERARIA TITULAR DE LA  
TERCERA SALA

**LIC. MARIA LOURDES LUNA MENDIVIL**  
MAGISTRADA SUPERNUMERARIA

**LIC. RENE AGUILAR SAMANIEGO**  
MAGISTRADO SUPERNUMERARIO

**LIC. CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES**  
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

**LIC. LETICIA CASTRO FIGUEROA**  
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA PRIMERA SALA

**LIC. ALMA ALEJANDRINA RAZO SANTOYO**  
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA PRIMERA SALA.

**LIC. IRMA AMEZQUITA MARTINEZ**  
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA PRIMERA SALA.

**LIC. NORMA PATRICIA BRAVO CASTRO**  
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA SEGUNDA SALA.

**LIC. MARTHA ALEJANDRINA MARGAILLAN DIAZ**  
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA SEGUNDA SALA

**LIC. JUAN MANUEL SANTIAGO MEZA**  
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA SEGUNDA SALA

**LIC. MARIA DEL PILAR AYALA GUERRERO**  
SECRETARIA AUXILIAR ADSCRITA A LA SEGUNDA SALA

**LIC. JUAN MANUEL CRUZ SANDOVAL**  
SECRETARIA AUXILIAR ADSCRITO A LA TERCERA SALA.

## **I.- PRESENTACION**

Con el afán de que sirva de herramienta a los interesados en la justicia administrativa local, se publica el presente Boletín que contiene la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California incluyendo su exposición de motivos; el Reglamento de la propia Ley y la Jurisprudencia vigente emitida por este Organo Jurisdiccional.

Sabedores de que es común que los litigantes ante este Tribunal residen en diversas ciudades, - muchas veces distintas a aquellas en que las Salas y el Pleno tienen su sede; se consideró conveniente que las notificaciones que se realicen por listas se publiquen en INTERNET. La publicación de las listas mediante este servicio contribuirá a disminuir los gastos derivados de los litigios y a optimizar recursos en beneficio de los justiciables.

Con satisfacción anunciamos esta medida como un primer paso en el proyecto de modernización del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California.

**Presidente**

**Lic. Alberto Loaiza Martínez**

# **INICIATIVA DE LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

## **EXPOSICION DE MOTIVOS**

En el Estado de Derecho Contemporáneo, el individuo tiene el derecho de ser protegido contra sus iguales y contra los abusos del poder de los gobernantes. En este sentido, el estado de derecho no permite injerencias en la esfera jurídica de los administrados, sino con fundamento en una ley, de tal manera que toda la actividad administrativa se encuentra colocada a reserva y bajo preeminencia de la norma legal.

Así pues, la justicia administrativa, entendida como el género que comprende todos los instrumentos jurídicos que los ordenamientos han establecido para la tutela de los derechos subjetivos de los administrados frente a la actividad de la Administración Pública, constituye un elemento indispensable en el estado de derecho y adquiere singular relevancia en nuestros días, por la creciente actividad que el estado moderno desarrolla para armonizar y coordinar los diversos intereses de una comunidad pluralista.

En nuestro país, la justicia administrativa se imparte a través de dos sistemas jurisdiccionales: el judicialista de raíz anglosajona, representado por el juicio de amparo y el de los Tribunales Autónomos de lo Contencioso Administrativo, originarios de la familia jurídica romano-germánica, en su versión institucional francesa. Ambos sistemas han surgido como respuesta a necesidades de la realidad mexicana y ambos están arraigados en el texto constitucional.

Es a partir de la reforma constitucional de 1968 que se introduce la jurisdicción administrativa autónoma y especializada con la adición que se hace al artículo 104, fracción I, la que establece que las leyes federales podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y los particulares.

En este contexto, la evolución de la jurisdicción contenciosa administrativa en las entidades federativas, puede atribuirse a la influencia que el propio gobierno de la república ejerció en el ánimo de los ejecutivos estatales, quienes tomaron la decisión política de enriquecer el imperio de la legalidad en sus respectivos ámbitos competenciales, estableciendo Tribunales de lo Contencioso Administrativo inspirados en los modelos del Tribunal Fiscal de la Federación y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; entre los cuales se encuentran los Tribunales de los Estados de Veracruz, Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, y recientemente del Estado de México.

El Estado de Baja California no permaneció ajeno a esta evolución y así se explica que por disposición del Código Fiscal del Estado que entró en vigor en 1973, se instituyó la Junta de Revisión Fiscal del Estado, como órgano administrativo autónomo para resolver las controversias que se susciten entre los contribuyentes y las autoridades fiscales estatales. No obstante que éste órgano constituye un importante precedente en materia de impartición de justicia administrativa en el Estado, no presenta una solución integral, para lograr un adecuado control de la legalidad de los actos de la Administración Pública y la tutela de los derechos subjetivos de los administrados, dado su reducido ámbito competencial que se constriñe a la materia fiscal estatal y al alcance restringido de sus fallos, que se limitan a declarar la nulidad o validez de los actos impugnados; por lo que resulta necesario transformar a este órgano en un auténtico Tribunal de lo Contencioso Administrativo, acorde a la lógica jurídica, que dé respuesta a los reclamos de los administrados para la resolución de las controversias que se presentan, en virtud de una administración pública cada vez mas dinámica.

Las reformas constitucionales de mayo de 1987, ratificaron la facultad de las entidades federativas para establecer Tribunales de lo Contencioso Administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos, y en virtud de la reforma al Título Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobada por esa H. Legislatura con fecha 18 de marzo del año en curso, se introdujo en esta entidad federativa la función jurisdiccional para resolver las controversias que se susciten entre los particulares con la Administración Pública Estatal y Municipal, a cargo de un Tribunal Administrativo dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

La actual administración, desde sus inicios, se ha caracterizado por prestar atención prioritaria al mejoramiento del sistema de administración de justicia y, además, ha procurado toda clase de apoyos que están a su alcance para que a una mayor modernidad y dignidad de la función, corresponda un mejor espíritu de servicio, expeditéz y honestidad de quienes participan en la delicada tarea de impartir justicia.

La preservación del Estado de Derecho en la Entidad le ha permitido desarrollarse progresivamente en un clima de paz social y concordia. Con este propósito, y en atención a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se propone, mediante la presente iniciativa, la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, autónomo e independiente de la administración pública activa, que con plena jurisdicción, juzgue los actos de ésta para que revistan los principios de legalidad y proteja a los administrados contra los abusos del poder.

La iniciativa de ley cuyos motivos se exponen, se integra en dos títulos que en forma sistemática permiten dar el entorno jurídico al órgano encargado de ejercer la función jurisdiccional administrativa, así como la sustanciación de los juicios que ante él se promuevan, destacándose a continuación, los aspectos más relevantes.

El Título Primero contiene disposiciones que se refieren a la organización, funcionamiento y competencia del tribunal, distribuídas en siete capítulos. En primer término, el Capítulo Primero determina la naturaleza jurídica y objeto del Tribunal, que se caracteriza por ser un órgano formalmente administrativo, toda vez que se sitúa dentro del marco del poder ejecutivo pero independiente de la administración activa; y materialmente jurisdiccional, por cuanto que fundamentalmente conoce y decide controversias que se susciten entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados. Se inscribe dentro del contencioso de plena jurisdicción, lo que significa que el Tribunal tendrá todas las facultades propias del juzgador judicial para emitir resoluciones constitutivas y de condena, a fin de salvaguardar los derechos de los administrados, con los medios de apremio suficientes para conminar a la autoridad responsable al cumplimiento de sus determinaciones.

A este respecto, cabe destacar que el artículo 17 de la

Constitución General de la República, otorga a todos los órganos encargados de la impartición de justicia, el rango de plena jurisdicción y debe interpretarse que la referencia involucra también a los tribunales administrativos, porque independientemente de que no hace distinción o mención alguna entre tribunales judiciales y administrativos, los administrativos son generalmente los que no tienen independencia o autonomía y conocen de los asuntos en forma incompleta, con alcance en sus fallos meramente declarativos.

El Estado debe asumir la responsabilidad de crear tribunales independientes para la impartición de justicia a que tienen derecho todos los gobernados, otorgando sólidas garantías a los juzgadores; sólo así la independencia del Tribunal podrá manifestarse libremente en la emisión de resoluciones imparciales.

En este sentido, el Capítulo Segundo establece que el Tribunal se integrará con tres magistrados propietarios, designados por el Ejecutivo, con aprobación del Congreso Local, que sólo podrán ser removidos de su cargo, en los casos y conforme a los procedimientos señalados en la Constitución Local, para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Como presupuesto indispensable para garantizar una mejor impartición de justicia, se prevé el principio de inamovilidad para aquellos magistrados que sean ratificados para el periodo inmediato.

De igual forma, se señala que el Tribunal contará con un Secretario General de Acuerdos y los Secretarios Auxiliares, Actuarios y demás personal que el servicio requiera, precisándose los requisitos exigidos para ocupar estos cargos y los de la magistratura.

En lo que se refiere a su organización y funcionamiento, el Tribunal funcionará en Pleno y en Salas, integradas por un Magistrado cada una. Congruentes con la política de descentralización administrativa, se prevé que las Salas tendrán la residencia y circunscripción territorial que les fije el Tribunal en Pleno, con el ánimo de acercar la justicia administrativa a todas las poblaciones de nuestra entidad.

El Capítulo Tercero, establece que el Tribunal se integrará legalmente en Pleno con tres Magistrados y a él

corresponderá: Resolver los Recursos de Revisión que procedan en contra de las resoluciones definitivas de las Salas y de las que decreten o nieguen sobreseimientos; calificar las excusas, recusaciones e impedimentos de los Magistrados; resolver los conflictos que surjan entre el fisco estatal y los fiscos municipales sobre preferencia en el cobro de créditos fiscales; fijar la jurisprudencia del Tribunal; resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas y fijar su circunscripción territorial. Además, se establecen las atribuciones necesarias del Tribunal en Pleno para garantizar la disciplina y el buen funcionamiento de este órgano.

El Capítulo Cuarto, sirve de marco para normar las atribuciones y facultades del Presidente del Tribunal el que será elegido de entre sus miembros y durará en su cargo un año.

El Capítulo Quinto, precisa el ámbito competencial de las Salas, estableciéndose al efecto que las mismas conocerán, en términos genéricos, de los juicios que promuevan los particulares, domiciliados en su circunscripción territorial, en contra de resoluciones o actos de carácter administrativo, inclusive fiscal, dictados por las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados, que causen agravio a los particulares.

Finalmente, los Capítulos Sexto y Séptimo, se refieren a las facultades y atribuciones de los Secretarios y Actuarios del Tribunal y a las disposiciones relativas a vacaciones y guardias, respectivamente.

El Título Segundo, relativo al procedimiento contencioso administrativo, se compone de catorce capítulos. Cabe destacar, que el proceso jurisdiccional que se contempla en la presente iniciativa, es coincidente con los postulados constitucionales de impartición de justicia pronta, completa y oportuna, mediante un procedimiento simplificado pero respetuoso de las formalidades esenciales del procedimiento.

El Capítulo Primero establece que los juicios que se promuevan ante el Tribunal, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la propia ley; previniéndose la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Estado, siempre que sus normas no



se opongan a las prescripciones de ese ordenamiento.

No se permitirá la gestión de negocios, pero para que alguien pueda promover a nombre de otro, bastará que se acredite la personalidad mediante poder notarial o carta poder. Asimismo, los particulares o sus representantes podrán autorizar a Licenciado en Derecho o Contador Público para que efectúe promociones de trámite. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines.

Con el objeto de no obstaculizar la vía de impugnación de los particulares ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se prevé como medida saludable que será optativo agotar los recursos o medios de defensa que se establezcan en las leyes, o intentar desde luego el juicio ante el Tribunal.

Debido al carácter de plena jurisdicción de que está investido el Tribunal, se le otorgan facultades para imponer medidas de apremio y correcciones disciplinarias, con el fin de hacer cumplir sus determinaciones, las que consistirán, de acuerdo a la gravedad de la falta, en amonestación y multa.

El Capítulo Segundo contiene disposiciones sobre notificaciones y términos que se caracterizan por su sencillez.

En el Capítulo Tercero se proponen conjuntamente, por razones de método y técnica legislativa, las causales de improcedencia y sobreseimiento.

El capítulo siguiente establece los impedimentos de los Magistrados para conocer de los asuntos de su competencia, precisándose al efecto que, bajo su responsabilidad, deberán excusarse para conocer de los juicios, en los supuestos previstos por la ley.

En cuanto a la demanda y contestación que se regulan en los Capítulos Quinto y Sexto, en lo sustancial se establece un procedimiento ágil y de inmejorable sencillez con requisitos mínimos de formalidad. Los términos que se contemplan para la presentación de la demanda, así como para la contestación, serán de quince días en ambos casos.

En el Capítulo Séptimo referente a la suspensión de los actos impugnados, se introducen importantes disposiciones, con el fin de tutelar cabalmente los intereses legítimos de los particulares e inclusive de la Hacienda Pública Estatal o Municipal, al establecerse como regla general el otorgamiento de la suspensión en asuntos fiscales, condicionada al aseguramiento o garantía del interés fiscal, salvo que su dispensa haya sido otorgada por las propias autoridades fiscales.

Por lo demás, se señalan normas para facultar discrecionalmente a los Magistrados en el otorgamiento de la suspensión de los actos, sin mayores requisitos que los que se refieren a que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, cuando los actos impugnados hubieren sido ejecutados y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se dicte la sentencia que corresponda, se faculta a los Magistrados del Tribunal para que dicten las medidas cautelares que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso.

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento, regulados en Capítulo Octavo, establecen como tales la acumulación de autos, nulidad de notificaciones y la recusación de Magistrados por impedimento legal.

En el capítulo de pruebas, se previene una amplia posibilidad para ofrecerlas y admitirlas, con excepción de la confesional de autoridades, las que no tengan relación inmediata con los hechos y las contrarias a la moral y al derecho.

El Magistrado instructor podrá ordenar cualquier medio de probanza que estime necesario para llegar al conocimiento de la verdad, no obstante que las partes no los hayan ofrecido. Asimismo, el Tribunal estará facultado para hacer uso de los medios de apremio cuando las autoridades demandadas no exhiban con oportunidad las copias de los documentos solicitadas por las partes para ser ofrecidas como prueba en el juicio.

El Capítulo Décimo establece el orden que deberá seguir la audiencia del juicio, misma que tendrá por objeto resolver las cuestiones incidentales, recibir y desahogar las pruebas y oír los alegatos de las partes.

El Capítulo Décimoprimer denominado De La Sentencia, dispone que la sentencia definitiva no solo deberá limitarse a declarar la nulidad o validez de la resolución o acto impugnado, o en su caso la reposición del procedimiento, sino que además podrá modificar dicho acto o resolución y precisar el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho afectado.

Asimismo, se establecen específicamente las causales de ilegalidad de los actos o resoluciones impugnados.

En capítulo aparte, denominado Del Cumplimiento de la Sentencia, la ley señala un plazo perentorio para el cumplimiento de las sentencias, dotando de amplias facultades al Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones.

El capítulo siguiente, regula la interposición de los recursos de reclamación, de queja y de revisión. El primero de ellos, es procedente en contra de las resoluciones del Magistrado instructor que desechen la demanda, la contestación o las pruebas; que rechacen la intervención del tercero, o aquellas que nieguen la suspensión del acto reclamado.

El recurso de queja, es procedente contra actos de las autoridades demandadas por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión del acto reclamado o en el cumplimiento de la sentencia ejecutoria; y respecto al recurso de revisión, éste será procedente en contra de las resoluciones, de las Salas que decreten o nieguen sobreseimientos y las definitivas.

En favor de la simplicidad del procedimiento, las reglas para la tramitación de los citados recursos, se caracterizan por su sencillez y la brevedad de los plazos legales.

Finalmente, el capítulo último establece las normas relativas a la jurisprudencia del Tribunal que es un aspecto medular para que la justicia administrativa se aplique con un criterio permanente pero abierto a los cambios necesarios; jurisprudencia que será obligatoria para el Tribunal y para sus Magistrados conforme a la interpretación adecuada, recta y justa de las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales aplicables al caso concreto.

Los artículos transitorios contienen providencias para la instalación y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que sustituirá a la Junta de Revisión Fiscal del Estado y norman la prosecución de los juicios y recursos en trámite, a la fecha en que entre en vigor este ordenamiento.

Asimismo, se ordena la abrogación de la Ley Orgánica de la Junta de Revisión Fiscal del Estado y la derogación del Título Cuarto, Capítulos I y II del Código Fiscal del Estado, que se refieren a la sustanciación de los juicios ante la citada Junta de Revisión Fiscal; y la de todas las disposiciones legales que se opongan a la presente iniciativa de ley.

En base a lo anterior expuesto, el Ejecutivo a mi cargo, con fundamento en los artículos 17 y 117 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 fracción II, 49 fracción II, 52 y 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; somete a la consideración del H. Congreso del Estado, la siguiente iniciativa:

# LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

## I N D I C E

### TITULO PRIMERO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

<b>CAPITULO PRIMERO</b>	
Disposiciones Generales .....	
<b>CAPITULO SEGUNDO</b>	
De la Integración del Tribunal .....	
<b>CAPITULO TERCERO</b>	
Del Pleno .....	
<b>CAPITULO CUARTO</b>	
Del Presidente .....	
<b>CAPITULO QUINTO</b>	
De las Salas .....	
<b>CAPITULO SEXTO</b>	
De los Secretarios y Actuarios .....	
<b>CAPITULO SEPTIMO</b>	
De las Vacaciones y Guardias .....	

### TITULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO

<b>CAPITULO PRIMERO</b>	
Disposiciones Generales .....	
<b>CAPITULO SEGUNDO</b>	
De las Notificaciones y Términos .....	
<b>CAPITULO TERCERO</b>	
De la Improcedencia y Sobreseimiento .....	
<b>CAPITULO CUARTO</b>	
De los Impedimentos .....	
<b>CAPITULO QUINTO</b>	
De la Demanda .....	

<b>CAPITULO SEXTO</b>	
De la Contestación .....	
<b>CAPITULO SEPTIMO</b>	
De la Suspensión .....	
<b>CAPITULO OCTAVO</b>	
De los Incidentes .....	
<b>CAPITULO NOVENO</b>	
De las Pruebas .....	
<b>CAPITULO DECIMO</b>	
De la Audiencia .....	
<b>CAPITULO DECIMOPRIMERO</b>	
De la Sentencia .....	
<b>CAPITULO DECIMOSEGUNDO</b>	
Del Cumplimiento de la Sentencia .....	
<b>CAPITULO DECIMOTERCERO</b>	
De los Recursos .....	
<b>CAPITULO DECIMOCUARTO</b>	
De la Jurisprudencia .....	
<b>ARTICULOS TRANSITORIOS</b>	

# **LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

## **TITULO PRIMERO**

### **DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **CAPITULO PRIMERO**

##### **DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTICULO 1º.-** El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es un órgano autónomo en sus fallos e independiente de cualquier autoridad administrativa, dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

**ARTICULO 2º.-** El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios y Organismos Descentralizados, y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales.

**ARTICULO 3º.-** El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, residirá en la Capital del Estado y tendrá la organización y procedimiento jurisdiccional que esta Ley establece.

#### **CAPITULO SEGUNDO**

##### **DE LA INTEGRACION DEL TRIBUNAL**

**ARTICULO 4º.-** El Tribunal se integrará con tres Magistrados Numerarios y dos Magistrados Supernumerarios. Estos últimos se integrarán al Pleno del Tribunal en los casos necesarios.

Contará, además, con un Secretario General de Acuerdos y los Secretarios Auxiliares, Actuarios y demás personal jurídico y administrativo que requiera el servicio.

**ARTICULO 5º.-** El Tribunal ejercerá sus funciones, en Pleno y en Salas.

**ARTICULO 6º.-** El Ejecutivo del Estado propondrá al Congreso una terna de profesionistas que reúnan los requisitos previstos en el siguiente artículo, cada vez que sea necesario nombrar un nuevo Magistrado del Tribunal, para que la Legislatura lo elija mediante el voto de mayoría calificada. En caso de que ninguno de los profesionistas propuestos obtenga

dicha votación, se procederá a una segunda ronda, en la cual no participará el miembro de la terna que haya obtenido menos votos de los tres. Para decidir el nombramiento a favor de uno de los integrantes restantes, se requerirá la votación por mayoría absoluta.

Los Magistrados nombrados mediante este procedimiento, rendirán su protesta ante el Congreso del Estado y desempeñarán su cargo por un período de seis años, durante el cual sólo podrán ser removidos mediante Juicio Político. Treinta días antes de que termine el período de un Magistrado, el Titular del Ejecutivo podrá proponerlo al Congreso del Estado para nombrarlo como tal, para otro período de seis años, sin necesidad de formular terna. La Legislatura sólo podrá ratificar al Magistrado mediante los votos de la misma mayoría calificada.

**ARTICULO 7º.-** Para ser Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- Tener más de 35 años de edad y menos de 65, el día de la designación;

III.- Poseer título profesional de Licenciado en Derecho, expedido cuando menos cinco años antes del día de su designación, por Institución legalmente facultada para ello;

IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V.- Tener por lo menos tres años de experiencia profesional en Derecho Administrativo y Tributario, y

VI.- Tener una residencia en el Estado, de cinco años anteriores al día de su nombramiento.

**ARTICULO 8º.-** No podrán reducirse los emolumentos de los Magistrados durante el término de su cargo.

**ARTICULO 9º.-** Las faltas temporales de los Magistrados Numerarios serán cubiertas por los Supernumerarios, así como las definitivas, en tanto se provea al nombramiento del Magistrado Numerario en los términos de la presente Ley.

**ARTICULO 10.-** Las licencias a los Magistrados serán concedidas por el Tribunal en Pleno, sin goce de sueldo, hasta por dos meses.

Las que excedan del plazo señalado, sólo podrá concederlas el Gobernador del Estado, con la aprobación de la Legislatura Local o de la Comisión Permanente, en su caso.



**ARTICULO 11.-** El Tribunal tendrá un Presidente, que a su vez, podrá integrar una de las Salas. Durará en su cargo un año, pudiendo ser reelecto.

**ARTICULO 12.-** El Secretario General de Acuerdos, será nombrado por el Tribunal en Pleno. Sus faltas temporales serán suplidas por el personal que para tal efecto designe el Tribunal, en los términos de la presente Ley.

**ARTICULO 13.-** Para ser Secretario o Actuario del Tribunal, se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- Poseer título profesional de Licenciado en Derecho, legalmente registrado;

III.- Notoria buena conducta y con experiencia profesional en materia administrativa y fiscal, de un mínimo de tres años;

IV.- No haber sido condenado por delito intencional, y

V.- Tener una residencia en el Estado, de cinco años anteriores al día de su nombramiento.

**ARTICULO 14.-** Los Magistrados en funciones, Secretarios de Acuerdos y Actuarios, estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo de la Federación, Estado, Municipio, Entidades Públicas Paraestatales o de índole privada, excepto los de carácter docente u honorífico.

También estarán impedidos para ejercer su profesión salvo en causa propia.

## **CAPITULO TERCERO**

### **DEL PLENO**

**ARTICULO 15.-** El Tribunal se integra en Pleno con tres Magistrados en funciones. Para que pueda sesionar, será indispensable la presencia de todos sus miembros.

**ARTICULO 16.-** Las resoluciones del Tribunal en Pleno, se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los Magistrados, que no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimento legal.

**ARTICULO 17.-** Es competencia del Tribunal en Pleno:

I.- Calificar las excusas, recusaciones e impedimentos de los Magistrados y, en su caso, llamar al Magistrado Supernumerario;

II.- Resolver los recursos que esta Ley establece en contra de las resoluciones que dicten las Salas;

III.- Resolver los conflictos que surjan entre el Fisco Estatal y los Fiscos Municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales;

IV.- Fijar y modificar la jurisprudencia del Tribunal;

V.- Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas del Tribunal; y

VI.- Fijar la circunscripción territorial de las Salas del Tribunal, y en su caso, la distribución de los asuntos entre las mismas.

**ARTICULO 18.-** El Tribunal en Pleno tiene además, las siguientes atribuciones:

I.- Designar a su Presidente;

II.- Fijar la sede de las Salas del Tribunal y la adscripción de los Magistrados, Secretarios Auxiliares y Actuarios de las Salas;

III.- Derogada.

IV.- Elaborar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos del Tribunal;

V.- Aprobar y reformar el Reglamento Interno del Tribunal;

VI.- Nombrar y remover al Secretario General de Acuerdos y a los demás Secretarios Auxiliares y Actuarios, previa opinión del Magistrado de la Sala de su adscripción; y

VII.- Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina del Tribunal e imponer las sanciones administrativas que procedan, a los Secretarios, Actuarios y demás personal del Tribunal.

## **CAPITULO CUARTO**

### **DEL PRESIDENTE**

**ARTICULO 19.-** El Presidente del Tribunal será designado de entre sus miembros, en la primera sesión anual del Pleno.

**ARTICULO 20.-** Son atribuciones del Presidente del Tribunal:

I.- Representar al Tribunal, ante todo tipo de autoridades;

- II.- Integrar una de las Salas del Tribunal;
- III.- Conocer y despachar la correspondencia del Tribunal;
- IV.- Conceder o negar licencias hasta de cinco días, por año, a los Secretarios, Actuarios y personal administrativo del Tribunal, previa opinión del Magistrado de la Sala que corresponda;
- V.- Dirigir los debates y conservar el orden, durante las sesiones plenarias;
- VI.- Autorizar con el Secretario General de Acuerdos, las Actas del Tribunal en Pleno, en las que se harán constar sus deliberaciones y las resoluciones que se tomen;
- VII.- Publicar los precedentes y la jurisprudencia del Tribunal;
- VIII.-Sustanciar los recursos que sean de la competencia del Tribunal en Pleno hasta ponerlos en estado de resolución y designar por turno al Magistrado Ponente;
- IX.- Proyectar y someter a la consideración del Pleno, el Presupuesto Anual de Egresos del Tribunal y dictar las órdenes relacionadas con el ejercicio del mismo;
- X.- Enviar oportunamente el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Tribunal al Poder Ejecutivo del Estado, para que se incorpore al Proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, con las observaciones correspondientes;
- XI.- Proyectar y someter a la consideración del Tribunal, el Reglamento Interior del mismo;
- XII.- Suministrar al Congreso Local o al Ejecutivo, los informes que soliciten respecto a la impartición de justicia administrativa; y
- XIII.- Las demás que le confiera el Pleno del Tribunal.

## **CAPITULO QUINTO**

### **DE LAS SALAS**

**ARTICULO 21.-** El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, funcionará en Salas, integradas por un Magistrado cada una. Tendrán la residencia y circunscripción territorial que les fije el Tribunal en Pleno.

**ARTICULO 22.-** Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes:

I.- Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares.

II.- Los de naturaleza fiscal emanados de Autoridades Fiscales Estatales, Municipales o de sus Organismos Fiscales Autónomos, que causen agravio a los particulares.

III.- Los que se emitan con motivo de la aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

IV.- Los que se emitan con motivo del incumplimiento de contratos de obra pública y, en general, de contratos administrativos en que el Estado, los Municipios o sus Organismos Descentralizados sean parte.

V.- Los que versen sobre pensiones y jubilaciones, a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California.

VI.- Los dictados conforme a otras leyes que le otorguen competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

VII.- Los de carácter administrativo y fiscal favorables a los particulares, emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o

de sus Organismos Descentralizados, cuando dichas autoridades promuevan su nulidad.

Para efectos de este artículo, son definitivos los actos o resoluciones que no puedan ser revocados o modificados, sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto por la Ley que rija el acto, o en el proceso contencioso administrativo.

**ARTICULO 23.-** Las Salas del Tribunal conocerán por razón de territorio, respecto de los juicios que promuevan los particulares o las autoridades, con domicilio en su circunscripción territorial.

**ARTICULO 24.-** Son atribuciones de los Magistrados que integran las Salas:

I.- Despachar la correspondencia de las Salas;

II.- Aplicar las medidas y criterios que exijan el orden, buen servicio y la disciplina de la Sala;

III.- Imponer las correcciones disciplinarias al personal;

IV.- Emitir opinión respecto de las solicitudes de Licencia, que presente el personal de la Sala;

V.- Rendir oportunamente un Informe al Presidente del Tribunal, respecto de las labores de las Salas y principales resoluciones dictadas por ellas; y

VI.- Las demás que les señalen las disposiciones legales.

## **CAPITULO SEXTO**

### **DE LOS SECRETARIOS Y ACTUARIOS**

**ARTICULO 25.-** Son atribuciones del Secretario General de Acuerdos, las siguientes:

I.- Acordar con el Magistrado Presidente, lo relativo a las sesiones del Tribunal en Pleno;

II.- Dar cuenta en las sesiones del Tribunal, tomar la votación de los Magistrados, formular el Acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III.- Engrosar los fallos del Tribunal, autorizándolos con su firma en unión del Presidente;

IV.- Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para la resolución del Tribunal;

V.- Tramitar y firmar la correspondencia administrativa del Tribunal, que no compete al Presidente;

VI.- Llevar el registro de las personas que puedan ser designadas peritos terceros o en rebeldía de las partes;

VII.- Expedir y certificar Constancias que obren en los expedientes;

VIII.- Proyectar los autos y resoluciones que le indique el Presidente del Tribunal; y

IX.- Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal, esta Ley y demás Ordenamientos legales.

**ARTICULO 26.-** Son atribuciones de los Secretarios Auxiliares, las siguientes:

I.- Auxiliar al Magistrado de la Sala de su adscripción en la formulación de proyectos de autos de trámite y de resoluciones que se les encomienden;

II.- Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado de la Sala, cuando éstas deban practicarse fuera del local del Tribunal;

III.- Suplir las faltas temporales del Secretario General de Acuerdos;

IV.- Redactar y autorizar las actas de las audiencias en las que les corresponda dar cuenta y autorizar las resoluciones que recaigan en los expedientes;

V.- Expedir y certificar constancias que obren en los expedientes, y

VI.- Las demás que les encomienden los Magistrados, el Secretario General de Acuerdos, esta Ley y demás ordenamientos.

**ARTICULO 27.-** Son atribuciones de los Actuarios:

I.- Notificar en tiempo y forma prescritos por la Ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnadas;

II.- Formular los Oficios de notificación de los Acuerdos que se dicten y enviarlos a su destino, asentando en el expediente, la razón de haber hecho la notificación y de haber entregado los Oficios de notificación, respectivos;

III.- Practicar las diligencias que les encomiende el Magistrado; y

IV.- Las demás que les señalen los Magistrados, el Secretario General de Acuerdos, los Secretarios Auxiliares, esta Ley y demás Ordenamientos.

## **CAPITULO SEPTIMO**

### **DE LAS VACACIONES Y GUARDIAS**

**ARTICULO 28.-** El personal del Tribunal disfrutará de su período vacacional, en los mismos términos que se señale para el Poder Judicial del Estado.

**ARTICULO 29.-** Antes de iniciar el período de vacaciones, el Presidente designará al personal correspondiente, para que provean y

despachen durante el receso, los asuntos de trámite y dicten resoluciones de notoria urgencia.

## **TITULO SEGUNDO**

### **DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO**

#### **CAPITULO PRIMERO**

##### **DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTICULO 30.-** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determina este Título.

A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente, el Código de Procedimientos Civiles del Estado, siempre que se refiera a Instituciones previstas en esta Ley y que la disposición supletoria se avenga al procedimiento contencioso que la misma establece.

**ARTICULO 31.-** Son partes en el juicio contencioso administrativo:

I.- El Actor;

II.- El demandado. Tendrán ese carácter:

A).- La autoridad que realizó el acto o emitió la resolución impugnada;

B).- El particular a quien favorezca la resolución, cuya nulidad o modificación pida la autoridad administrativa.

III.- El Titular de la Dependencia o Entidad Administrativa Pública Estatal o Municipal, de la que dependa la autoridad mencionada en la Fracción anterior; y

IV.- El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

**ARTICULO 32.-** Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el



promoviente no sepa o no pueda firmar, caso en el que estampará su huella digital y firmará otra persona a su ruego.

**ARTICULO 33.-** Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro, deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de presentación de la demanda o de la contestación en su caso.

La representación de los particulares, se otorgará en Escritura Pública o Carta Poder, firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante Notario Público o ante el Secretario General del Tribunal.

Los profesionistas autorizados en los juicios contenciosos administrativos, podrán ser coadyuvantes de la justicia administrativa para efectos de la entrega de oficios de notificación a las autoridades demandadas, en los términos del Reglamento Interior.

Los particulares o sus representantes, podrán autorizar por escrito a Licenciado en Derecho o Contador Público, que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, y demás previstas por esta Ley y ordenamientos reglamentarios.

Las autoridades demandadas no podrán ser representadas en el juicio contencioso administrativo, pero podrán nombrar delegados para el efecto de que rindan pruebas, aleguen, hagan promociones en las mismas audiencias e interpongan recursos. Se exceptúa de lo anterior a los Ayuntamientos, quienes podrán comparecer por conducto del Síndico Procurador en los términos de la legislación municipal.

**ARTICULO 34.-** En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan.

**ARTICULO 35.-** Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. De igual forma, podrán promover dicho juicio, dentro del

plazo legal, cuando una vez interpuesto un recurso administrativo o medio de defensa, se hubieren desistido del mismo.

**ARTICULO 36.-** El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá aplicar cualquiera de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias:

I.- Amonestación;

II.- Multa de un mes de salario mínimo general vigente en el Estado. Si no se atiende el primer requerimiento, se impondrá multa equivalente a tres meses de salario mínimo general; en caso de persistir la desobediencia, se impondrá multa equivalente hasta un año de salario, y

III.- Uso de la fuerza pública.

Los Magistrados del Tribunal en el ejercicio de sus funciones tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se guarde el respeto y la consideración debidos, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, haciendo uso de los medios de apremio y medidas disciplinarias que este artículo prevé.

## **CAPITULO SEGUNDO**

### **DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS**

**ARTICULO 37.-** Las resoluciones se notificarán a más tardar el tercer día siguiente a aquel en que se pronuncien.

Los particulares en el primer escrito que presenten deberán señalar domicilio en la población donde resida la Sala ante la que se promueva, y comunicar en su caso, el cambio del mismo, para que en éste se practiquen las notificaciones que deban ser personales. En caso de no hacerlo así, éstas se realizarán por lista, hasta en tanto no se señale el domicilio conforme a este artículo.

**ARTICULO 38.-** Las notificaciones se harán:

I.- A las autoridades, por oficio o por telegrama, cuando se trate de resoluciones que exijan el cumplimiento inmediato;

II.- A los particulares, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de las siguientes resoluciones:

- A).- La que admita o deseche la demanda, la contestación o la ampliación en su caso.
- B).- La que señale fecha para audiencia.
- C).- La que mande citar a un tercero.
- D).- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo.
- E).- La que resuelva un incidente.
- F).- La que decrete un sobreseimiento.
- G).- La sentencia definitiva.
- H).- La resolución dictada en el algún recurso.
- I).- En todos aquéllos casos en que el Magistrado Instructor, así lo ordene.

III.- Fuera de los casos señalados en las Fracciones anteriores, las notificaciones que deban hacerse a los particulares, se harán en el local del Tribunal, si se presentan dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquélla en que se haya dictado la resolución. Cuando no se presenten, se hará por lista autorizada que se fijará en sitio visible del local del Tribunal.

Las notificaciones surtirán sus efectos, al día hábil siguiente a aquél en que fueron hechas.

En los casos de notificación por lista, se tendrá como fecha de notificación, el día siguiente a aquél en que se hubiere fijado.

En las actuaciones respectivas, el Actuario deberá asentar la razón del envío por correo o entrega de los Oficios de notificación, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas, se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

La notificación omitida o irregular, se entenderá legalmente hecha a partir de la fecha en que el interesado se haga sabedor de la misma, salvo cuando se promueva su nulidad.

**ARTICULO 39.-** El cómputo de los plazos, se sujetará a las reglas siguientes:

- I.- Empezará a correr a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación y serán improrrogables;

II.- Se contarán por días hábiles, entendiéndose por éstos, aquéllos en que se encuentren abiertas al público las Oficinas del Tribunal. La existencia de personal de guardia no habilitará los días; y

III.- Los plazos serán comunes, con excepción de los que se concedan para la interposición de recursos y para contestar la demanda.

### **CAPITULO TERCERO**

#### **DE LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO**

**ARTICULO 40.-** El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente contra actos o resoluciones:

I.- Cuya impugnación no corresponda conocer al Tribunal;

II.- Que se hayan consumado de modo irreparable o que no afecten el interés jurídico del demandante, entendiéndose por éste, la afectación de un derecho subjetivo o la lesión objetiva al particular derivada de un acto administrativo o por una resolución de las autoridades fiscales contrarios a la ley;

III.- Que hayan sido materia de sentencia de fondo pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiere identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas;

IV.- Respecto de las cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, entendiéndose por este último cuando no se promovió medio de defensa en los términos de las Leyes respectivas o juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los plazos de Ley;

V.- Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante la Autoridad Administrativa Estatal, Municipal, sus Organismos Descentralizados o ante el propio Tribunal;

VI.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente, que no existe la resolución o acto impugnado;

VII.- Que hayan sido materia de resolución en diverso proceso jurisdiccional;

VIII.- Respecto de los cuales hayan cesado los efectos o no puedan surtir sus efectos legal o materiales, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y

IX.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley.

**ARTICULO 41.-** Procede el sobreseimiento del juicio:

I.- Cuando el actor se desista del juicio;

II.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el Artículo anterior;

III.- Cuando el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es intransmisible o si su muerte deja sin materia dicho juicio;

IV.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor, y

V.- En los demás casos, en que por disposición legal exista impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo.

El sobreseimiento del juicio en los términos previstos por la fracción IV, impide a la autoridad responsable repetir el acto impugnado, motivado en los mismos hechos; en caso contrario el actor podrá denunciar ante la Sala del Conocimiento la repetición del acto, la cual dará vista con la denuncia por un término de cinco días a las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, para que expongan lo que a su derecho convenga. En caso de que la Sala, no obstante las manifestaciones hechas valer por las autoridades demandadas, encontrara fundada la denuncia correspondiente, requerirá a la autoridad ordenadora la revocación del acto,

apercibida de que en caso de insistir se hará acreedora a cualquiera de los medios de apremio previstos en esta Ley.

## **CAPITULO CUARTO**

### **DE LOS IMPEDIMENTOS**

**ARTICULO 42.-** Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, estarán impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes:

I.- Si son cónyuges o parientes consanguíneos o civiles de las partes o de sus representantes; en línea recta, sin limitación de grado. Dentro del cuarto grado en la colateral por consanguinidad, o dentro del segundo en la colateral por afinidad;

II.- Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el juicio;

III.- Si han sido Abogados o Apoderados de las partes en el mismo asunto;

IV.- Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o con sus representantes;

V.- Si hubiesen aconsejado como Asesores respecto del acto impugnado, o si hubiesen emitido, en otra instancia, la resolución o procedimiento combatido; y

VI.- Si son partes en un juicio similar pendiente de resolución por el Tribunal.

**ARTICULO 43.-** Los Magistrados del Tribunal que se consideren impedidos para conocer de algún asunto, harán la manifestación ante el Pleno del Tribunal, el que calificará la excusa y llamará, en su caso, al Magistrado Supernumerario.

**ARTICULO 44.-** El Magistrado que teniendo impedimento para conocer de un negocio, no haga la manifestación correspondiente, o que, no

teniéndolo, presente excusa apoyándose en causas diversas de las señaladas en el Artículo anterior, pretendiendo que se le aparte del conocimiento del juicio, incurre en responsabilidad.

## **CAPITULO QUINTO**

### **DE LA DEMANDA**

**ARTICULO 45.-** La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala correspondiente al domicilio del actor o enviarse por correo certificado, dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnados, o al día en que se haya tenido conocimiento del mismo.

La entrega de una resolución, por escrito al particular, se considera como notificación, aunque no se utilice este término por la autoridad.

En los casos de negativa ficta, el interesado podrá interponer la demanda en cualquier tiempo mientras no se dicte resolución expresa, y siempre que haya transcurrido el término en que la autoridad debió dictar la resolución. A falta de término establecido, el silencio de las autoridades administrativas se considerará resolución negativa cuando transcurran sesenta días naturales.

Las autoridades podrán deducir la acción de lesividad de sus actos y resoluciones en favor de los particulares, dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se le hayan notificado éstos, salvo que dicha resolución haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el cual la autoridad podrá demandar la nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto producido.

**ARTICULO 46.-** El demandante tendrá derecho de ampliar la demanda dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efecto la notificación del acuerdo que admita la contestación de la misma, en los casos siguientes:

I.- Cuando se demanda una negativa ficta; y

II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto impugnado, sino hasta que la demanda esté contestada.

En los casos anteriores, la omisión de la ampliación de la demanda no traerá como consecuencia el que se tengan por consentidos los hechos y por aplicables los fundamentos y motivos expresados al contestarse la demanda.

**ARTICULO 47.-** La demanda deberá indicar:

I.- Nombre y domicilio del actor y en su caso, de quien promueva en su nombre;

II.- Resolución o acto administrativo que se impugne;

III.- Autoridad o autoridades demandadas o nombre y domicilio del particular demandado, cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa;

IV.- Nombre y domicilio del tercero perjudicado, en su caso;

V.- Los hechos que den motivo a la demanda;

VI.- La fecha en que se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnada;

VII.- Las pruebas que ofrezca;

En caso de que se ofrezcan pruebas pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre las que deban versar y señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos señalamientos, se tendrán por no ofrecidas; y

VIII.- La expresión de los motivos de inconformidad, los cuales deberán consistir en el señalamiento de una o varias de las causales de nulidad previstas en esta Ley, así como los hechos y razones por las cuales se consideran aplicables al acto o resolución impugnada.

Tratándose de resoluciones dictadas en recursos administrativos, el actor deberá expresar motivos de inconformidad en contra de éstas, y simultáneamente podrá repetir, como motivos de inconformidad, los agravios expresados dentro del recurso intentado, o expresar nuevos motivos de inconformidad en contra del acto administrativo que se impugnó dentro del recurso. En todos los casos el actor se deberá sujetar a lo dispuesto en la fracción VIII.



**ARTICULO 48.-** El demandante deberá adjuntar a su promoción:

I.- Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes;

II.- El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, cuando no gestione en nombre propio;

III.- El documento en que conste la resolución o acto impugnado, o en caso de negativa ficta, copia de la instancia no resuelta por la autoridad;

IV.- Las pruebas documentales que ofrezca; y

V.- Constancia de la notificación del acto impugnado, excepto cuando el demandante declare bajo protesta de decir verdad, que no recibió constancia o cuando hubiese sido por correo. Si la notificación fue por Edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el nombre del órgano en que ésta se hizo.

Si al examinarse la demanda, se advierte que ésta es oscura o irregular, o cuando no se adjunten las copias o documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado de la Sala requerirá mediante notificación personal al demandante, para que la corrija, aclare, complete o exhiba los documentos en el plazo de cinco días, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo, se desechará de plano la demanda o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, en su caso.

**ARTICULO 49.-** La demanda se admitirá dentro de los tres días siguientes al de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la admisión de la demanda.

La admisión o desechamiento de las pruebas que se ofrezcan, así como las providencias necesarias para su desahogo, se podrán acordar en el auto que admita la demanda o hasta que haya quedado fijada la controversia.

**ARTICULO 50.-** La demanda se desechará, en los siguientes casos:

I.- Si se encontrase motivo manifiesto o indudable de improcedencia; y

II.- Cuando prevenido el actor para subsanar los defectos de la misma, no lo hiciera en el plazo de Ley.

## **CAPITULO SEXTO**

### **DE LA CONTESTACION**

**ARTICULO 51.-** Admitida la demanda, se correrá traslado de ella a las partes para que contesten dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda, también será de quince días, a partir de aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita.

Si no se produce la contestación en tiempo, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que, por las pruebas rendidas, o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

**ARTICULO 52.-** La parte demandada, en su contestación, se referirá a cada uno de los hechos señalados en el escrito de demanda, citará los fundamentos legales que considere aplicables al caso y ofrecerá las pruebas que estime pertinentes. Asimismo, deberá anexarse el documento en que se acredite la personalidad, cuando el demandado sea un particular y no gestione en nombre propio.

Los demandados deberán acompañar una copia de la contestación de la demanda y de los documentos anexos a ella para cada una de las partes, y en su defecto, el Magistrado de la Sala requerirá al demandado para que exhiba las copias necesarias en el plazo de tres días, apercibiéndole de que se tendrá por no contestada en caso de incumplimiento.

**ARTICULO 53.-** El tercero perjudicado que no haya sido llamado a juicio, podrá apersonarse a juicio hasta antes de la audiencia, formulando alegatos y aportando las pruebas que considere pertinentes.

**ARTICULO 54.-** En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En el caso de resolución de negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se apoye la misma.

En la contestación de la demanda o hasta antes de concluir la audiencia del juicio, la autoridad demandada podrá revocar la resolución impugnada o allanarse a las pretensiones del demandante. De ocurrir alguno de estos supuestos, se dará vista al actor para que manifieste lo que a su derecho convenga en el plazo de tres días; de no haber oposición se considerará que ha quedado sin materia el juicio y, en consecuencia, procederá el sobreseimiento total o, en su caso, parcial.

**ARTICULO 55.-** Dentro del término de tres días, se acordará la contestación de la demanda, se tendrán por admitidas o desechadas las pruebas ofrecidas, y en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo.

## **CAPITULO SEPTIMO**

### **DE LA SUSPENSION**

**ARTICULO 56.-** La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede.

La suspensión definitiva se resolverá al acordarse la admisión de la contestación de la demanda o el acuse de rebeldía correspondiente de la autoridad demandada.

**ARTICULO 57.-** La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. Si se solicita después de presentada la demanda, se tramitará en forma incidental.

La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle

estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular.

**ARTICULO 58.-** La suspensión definitiva podrá ser revocada en cualquier momento del juicio si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó.

**ARTICULO 59.-** No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio.

**ARTICULO 60.-** Cuando los actos materia de impugnación, hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes, para preservar el medio de subsistencia del quejoso.

Las medidas cautelares que dicten, no serán impugnables en el procedimiento.

**ARTICULO 61.-** Tratándose del cobro de créditos fiscales, procederá la suspensión, previa garantía del interés fiscal ante las autoridades exactoras o en su caso, deberá acreditarse que la garantía le fue dispensada por dichas autoridades.

Procederá la suspensión sin otorgamiento de garantía del interés fiscal a juicio del Tribunal, siempre que la demandante acredite ser persona de escasos recursos económicos o que el crédito fiscal impugnado no rebase el equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado. En el supuesto de que se impugnaren diversos créditos en un sólo juicio, si la suma de éstos excede el equivalente señalado, el actor deberá garantizar el interés fiscal, para que subsista la suspensión obtenida previamente.

**ARTICULO 62.-** En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio.

La suspensión dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes, a aquél en que surta efectos la notificación del auto que la conceda.

Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

**ARTICULO 63.-** La suspensión otorgada conforme al Artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero otorga a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable.

Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, en el caso del párrafo anterior, deberá cubrir el costo de la que hubiere otorgado el actor.

**ARTICULO 64.-** Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia; el Magistrado dará vista con la solicitud a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda.

## **CAPITULO OCTAVO**

### **DE LOS INCIDENTES**

**ARTICULO 65.-** En el procedimiento contencioso administrativo, serán de previo y especial pronunciamiento, los siguientes incidentes:

- I.- Acumulación de autos;
- II.- Nulidad de notificaciones; y
- III.- Recusación por impedimento.

**ARTICULO 66.-** Procede la acumulación de dos o mas juicios pendientes de resolución, en los casos en que:

I.- Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios;

II.- Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugne varias partes del mismo acto; y

III.- Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos o resoluciones que sean unos antecedentes o consecuencias de los otros.

**ARTICULO 67.-** Las partes podrán hacer valer el incidente de acumulación de autos, hasta antes de la celebración de la audiencia.

**ARTICULO 68.-** La acumulación de autos se tramitará de oficio o a petición de parte, ante la Sala que esté conociendo del juicio más reciente. Dicha Sala, en el plazo de cinco días, resolverá lo que proceda.

**ARTICULO 69.-** Una vez decretada la acumulación, la Sala que conozca del juicio más reciente, deberá turnar los autos a la que conoció del primer juicio, en un plazo que no excederá de tres días. Cuando no pueda concretarse la acumulación porque en alguno de los juicios se hubiere celebrado la audiencia, a petición de parte, o de oficio, se decretará la suspensión del procedimiento en el juicio en trámite; la suspensión subsistirá hasta que se pronuncie la resolución definitiva en el otro negocio.

**ARTICULO 70.-** Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en la Ley, o en su caso, de acuerdo con las disposiciones aplicables, serán nulas. El perjudicado, podrá pedir que se declare la nulidad, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en el que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas, se desecharán de plano. Si se admite el incidente, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días, para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, en un término también de cinco días, la Sala dictará la interlocutoria respectiva.

Si se declara la nulidad de la notificación impugnada, la Sala ordenará la reposición de la misma y la de todas las actuaciones subsecuentes, hasta la fecha en que se haya declarado la nulidad.

**ARTICULO 71.-** Las partes podrán recusar a los Magistrados, cuando estén en alguno de los casos de impedimento a que se refiere esta Ley.

**ARTICULO 72.-** La recusación de Magistrados se promoverá ante el Tribunal en Pleno, en cualquier estado del juicio hasta antes de la celebración de la audiencia, mediante escrito al que acompañarán las pruebas pertinentes.

El Presidente del Tribunal, ordenará al Magistrado objeto de la recusación, para que en el plazo de cinco días, rinda un informe sobre la materia. A falta de informe, se presumirá cierto el impedimento. Si el Pleno declara fundada la recusación, el Magistrado será sustituido en los términos de esta Ley.

Los Magistrados que conozcan de una recusación, son irrecusables para ese sólo efecto.

## **CAPITULO NOVENO**

### **DE LAS PRUEBAS**

**ARTICULO 73.-** En los juicios que se tramiten ante el Tribunal serán admisibles toda clase de pruebas, excepto las de posiciones y la declaración de parte, cuando sean a cargo de las autoridades, sin perjuicio de que el Tribunal pueda solicitarles informe específico que considere necesario para mejor proveer. Para efectos de su admisión, las pruebas ofrecidas deberán reunir los siguientes elementos, o de lo contrario, se desecharán de plano:

I.- No ser contrarias a la moral y al derecho, y

II.- Tener relación inmediata y directa con los puntos controvertidos.

Aquellas que se hubieren rendido ante las autoridades demandadas, deberán ponerse a disposición del Tribunal con el expediente relativo, cuando la parte demandante así lo solicite.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, el Magistrado de la Sala ordenará dar

vista a la contraparte, para que en el plazo de tres días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración, hasta la sentencia en primera instancia.

**ARTICULO 74.-** Las Salas del Tribunal podrán ordenar de oficio, la práctica de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, o para acordar la exhibición de cualquier documento o el desahogo de las pruebas que estime conducentes, notificando oportunamente a las partes, a fin de que puedan intervenir, si así conviene a sus intereses.

**ARTICULO 75.-** A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia correspondiente, los funcionarios o autoridades, tienen obligación de expedir con toda oportunidad, las copias de los documentos que soliciten dichas partes; si las autoridades o funcionarios no cumplen con esa obligación, la parte interesada pedirá al Tribunal que requiera a los omisos.

El propio Tribunal hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días, pero, si no obstante dicho requerimiento, no se expidieran las copias solicitadas, el Tribunal hará uso de los medios de apremio.

**ARTICULO 76.-** La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de carácter técnico, científico o artístico. El Perito deberá tener título en la especialidad a la que pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje, si estuviere legalmente reglamentada. Si no lo estuviere, o estándolo no fuere posible obtenerlo, podrá nombrarse a una persona entendida en la materia.

**ARTICULO 77.-** Al ofrecer la prueba pericial, la parte oferente presentará el cuestionario del perito, quien deberá rendir su dictamen por escrito dentro de un plazo no menor de cinco días. El acuerdo que admita el dictamen ordenará dar vista a las partes para que formulen sus observaciones en términos de este artículo.

El Magistrado de la Sala solicitará al Titular de la Dependencia u Organismo Estatal o Municipal que estime idóneo, la designación de una persona con la preparación o conocimientos técnicos o científicos necesarios para que funja como perito del Tribunal dentro del juicio. El Titular será apercibido de que en caso de no proporcionar el perito solicitado, o no



proporcionare las facilidades necesarias para desempeñar esta función, se le aplicarán los medios de apremio previstos para que este Tribunal haga cumplir sus determinaciones.

Los funcionarios y empleados que sean comisionados para fungir como peritos por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal o Municipales, deberán desempeñar el cargo de perito como parte de sus funciones.

En caso que sean necesarios apoyos o elementos para la elaboración de su dictamen, el perito contará con los apoyos que se determinen en el Reglamento Interior.

Una vez presentado el dictamen, éste será puesto a disposición de las partes, para que estén en posibilidad de presentar objeciones al mismo por escrito, antes de la celebración de la audiencia. En ningún caso el plazo que se le otorgue a las partes podrá ser menor de cinco días hábiles para conocer del dictamen y formular sus objeciones si las consideran necesarias, las cuales deberán contener los elementos técnicos en que se basan. La parte que lo estime necesario podrá nombrar su propio perito a su costa, quien a partir de la aceptación del cargo, tendrá un plazo de diez días para formular su dictamen correspondiente. En caso de ser necesario, la realización de la audiencia se diferirá para respetar los plazos precisados en este párrafo.

En la audiencia, el perito o los peritos estarán obligados a dar respuesta a los cuestionamientos que verbalmente le formulen las partes y el Magistrado de la Sala, las que se harán constar en forma resumida en el acta que se levante de la audiencia, para ser valoradas al momento de la sentencia, junto con el dictamen y objeciones formuladas por escrito por las partes.

Los peritos no serán recusables pero deberán excusarse por alguna de las causas siguientes:

- I.- Consanguinidad dentro del cuarto grado con alguna de las partes, o parentesco por afinidad;
- II.- Interés directo o indirecto en el litigio, y

III.- Tener dependencia o relaciones de índole económica con cualquiera de las partes.

**ARTICULO 78.-** Los testigos, que no podrán exceder de tres en relación con cada hecho, deberán ser presentados por la oferente, y sólo en caso de que ésta manifieste imposibilidad para hacerlo, el Tribunal los mandará citar. Una vez admitida la prueba testimonial, no se aceptará la sustitución de testigos.

Cuando alguno de los testigos tenga el carácter de autoridad, el desahogo de esta prueba se hará por escrito, en un plazo no mayor de cinco días.

**ARTICULO 79.-** La valoración de las pruebas, se hará de acuerdo con las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California.

## **CAPITULO DECIMO**

### **DE LA AUDIENCIA**

**ARTICULO 80.-** La audiencia se celebrará ante la presencia del Magistrado de la Sala, concurren o no las partes, y su orden será el siguiente:

I.- Se dará cuenta con las reclamaciones de las partes y con cualquier cuestión incidental suscitada durante la tramitación del juicio; al efecto se recibirán las pruebas y los alegatos de las partes sobre el particular.

Acto continuo, la Sala pronunciará la resolución que proceda, ordenando en su caso, que se practiquen las diligencias omitidas.

II.- Si la resolución de las reclamaciones o de los incidentes no trae como consecuencia el que deba suspenderse la audiencia, se leerán la demanda, su contestación y las demás constancias de autos;

III.- Se estudiarán, de oficio, los sobreseimientos que procedan, respecto de las cuestiones que impidan que se emita una resolución de fondo, y se dictará la resolución que corresponda;

IV.- En su caso, se desahogarán las pruebas que hayan sido admitidas. El Magistrado de la Sala podrá formular a las partes, a sus representantes, a los testigos y peritos, toda clase de preguntas respecto a las cuestiones debatidas;

V.- Se oirán alegatos del actor, de la parte demandada y del tercero perjudicado, los que se producirán en ese orden.

Las partes podrán presentar sus alegatos por escrito o verbalmente. En este último caso no será necesaria su transcripción en los autos, ni podrán exceder de media hora por cada parte.

Las promociones que las partes presenten o formulen verbalmente en la audiencia, así como sus oposiciones contra los acuerdos que en ella se dicten, se resolverán en la misma audiencia o en el plazo de tres días, a juicio del Magistrado Instructor, y

VI.- La audiencia se dará por concluída y la Sala dictará la resolución dentro de los diez días siguientes.

## **CAPITULO DECIMOPRIMERO**

### **DE LA SENTENCIA**

**ARTICULO 81.-** La resolución que decrete el sobreseimiento del juicio por alguna de las causales previstas en esta Ley, podrá dictarse antes de la celebración de la audiencia de juicio o durante ésta.

**ARTICULO 82.-** Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno, pero deberán contener:

I.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;

II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y

III.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos o resoluciones cuya validez se reconozca o cuya nulidad se declare; la reposición del procedimiento que se ordene, los términos de la modificación del acto impugnado, y en su caso, la condena que se decrete.

**ARTICULO 83.-** Serán causas de nulidad de los actos y resoluciones impugnadas:

I.- Incompetencia de la autoridad;

II.- Incumplimiento u omisión de las formalidades que legalmente deba revestir;

III.- El estar fundados en disposiciones legales o reglamentarias no vigentes al momento de su emisión;

IV.- Violación de las disposiciones aplicadas o no haberse aplicado las debidas;

V.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o de facultades discrecionales, y

VI.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar.

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, al momento de resolver, cualquiera de las causales señaladas, si estima que ha sido acreditada en autos su existencia, aunque ésta no se haya invocado expresamente por el actor.

**ARTICULO 84.-** Para salvaguardar el derecho del afectado, la sentencia que declare fundada la pretensión del actor dejará sin efectos el acto o resolución impugnada. Fijará, además, los términos de la resolución que en su caso deba dictar la autoridad demandada y, tratándose de sentencia de condena, se ordenará también a la autoridad demandada el

hacer, el no hacer o el dar que correspondan, como consecuencia de la nulidad del acto o resolución impugnada.

## **CAPITULO DECIMOSEGUNDO**

### **DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA**

**ARTICULO 85.-** Causan ejecutoria las sentencias pronunciadas por el Tribunal, no impugnadas en términos de Ley o que habiéndolo sido, se haya declarado desierto o improcedente el medio de impugnación, o haya desistido de él el promovente, y las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios.

**ARTICULO 86.-** Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, el Tribunal la comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades demandadas, para su cumplimiento.

En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades demandadas, se les prevendrá para que informen en el plazo de cinco días, sobre el cumplimiento que se de a la sentencia respectiva.

**ARTICULO 87.-** Si en el plazo concedido las autoridades demandadas no acreditan el cabal cumplimiento de la resolución respectiva, las Salas del Tribunal, de oficio o a petición de parte, darán vista a dichas autoridades para que, en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga.

El Tribunal resolverá si la autoridad o servidor público ha cumplido con los términos de la sentencia; de lo contrario, la requerirá para que la cumpla, amonestándola y previniéndola que, en caso de renuencia, se le impondrán los medios de apremio previstos en esta Ley.

**ARTICULO 88.-** En el supuesto de que la autoridad demandada persista en su actitud omisa, el Tribunal solicitará al Titular de la Dependencia Estatal, Municipal u Organismo Descentralizado a quien se encuentre subordinado, para que conmine al funcionario responsable a cumplir con las determinaciones del Tribunal.

Si no obstante los requerimientos anteriores, no se dá cumplimiento a la resolución, el Tribunal podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto que se trate de autoridad electa por voto popular, en cuyo caso se procederá en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

**ARTICULO 89.-** Las sanciones mencionadas en este Capítulo, también serán procedentes cuando no se cumplimente en sus términos, la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto reclamado en el juicio.

## **CAPITULO DECIMOTERCERO**

### **DE LOS RECURSOS**

**ARTICULO 90.-** El recurso de reclamación, es procedente contra las resoluciones de los Magistrados que desechen la demanda, la contestación o las pruebas; que rechacen la intervención de terceros, o aquéllas que nieguen la suspensión del acto reclamado.

El recurso deberá interponerse ante la Sala de adscripción del Magistrado que hubiere dictado el acto recurrido, dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, expresando los agravios que le cause.

**ARTICULO 91.-** Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo anterior, la Sala dará vista a las partes por el término de cinco días para que expresen lo que a su derecho convenga y, sin más trámite, resolverá en el término de cinco días posteriores.

**ARTICULO 92.-** El recurso de queja es procedente contra actos de las autoridades demandadas, por exceso o defecto de la ejecución del auto en que se haya concedido la suspensión del acto reclamado, así como por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia definitiva que haya declarado fundada la pretensión del actor.

El recurso deberá interponerse por escrito ante la Sala que hubiese conocido del juicio, dentro de un plazo de cinco días siguientes a la notificación de la resolución que se pretenda recurrir, acompañando una copia del escrito del recurso para cada una de las partes.

**ARTICULO 93.-** Interpuesto el recurso a que se refiere el Artículo anterior, la Sala requerirá a la autoridad contra la que se hubiere interpuesto el recurso, para que rinda un informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro de un plazo de tres días. Transcurrido dicho lapso, la Sala resolverá lo conducente en el plazo de tres días. La falta o deficiencia de los informes, establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos y hará incurrir a las autoridades y organismos omisos en multa, en los términos de esta Ley.

**ARTICULO 94.-** Las resoluciones de las Salas que decreten o nieguen el sobreseimiento y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por las partes, mediante el recurso de revisión que será resuelto por el Pleno del Tribunal.

El recurso de revisión tiene por objeto que el Superior revoque o modifique la resolución del inferior.

El recurso deberá interponerse por escrito que se presentará ante el Magistrado de la Sala, dentro del plazo de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución que se pretenda recurrir, debiéndose expresar los agravios que causa al inconforme, precisando la parte de la resolución impugnada que le causa perjuicio, los preceptos legales que estima se violaron y los razonamientos tendientes a demostrar dichas violaciones.

El Magistrado de la Sala tendrá por interpuesto el recurso y lo remitirá dentro de los tres días siguientes al Magistrado Presidente para que acuerde su admisión si procede. En caso de estimar improcedente el recurso, lo turnará al Pleno, el cual decidirá su admisión o rechazo.

El Magistrado Presidente, al admitir el recurso designará por turno al Magistrado Ponente mandando correr traslado del mismo a las partes, por el término de cinco días, para que expresen lo que a su derecho convenga.

Transcurrido dicho plazo, el Magistrado Ponente formulará proyecto de resolución y lo someterá a la consideración de los Magistrados, quienes deberán emitir su voto dentro de los diez días siguientes.

La resolución se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados del Tribunal en Pleno.

El Pleno podrá aplicar el medio de apremio o medida disciplinaria, de los previstos por esta Ley que juzgue conveniente, cuando se denoste o falte al respeto a los Magistrados a través de la interposición de los recursos o cualquier otro recurso.

Si las faltas llegaran a constituir delitos, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, consignando al culpable a la autoridad competente.

Corresponderá al Magistrado de Sala dicha aplicación cuando la falta se cometa en primera instancia.

## **CAPITULO DECIMOCUARTO**

### **DE LA JURISPRUDENCIA**

**ARTICULO 95.-** Las sentencias firmes del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituirán Jurisprudencia, siempre que lo resuelto se sustente en tres ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran.

La Jurisprudencia del Tribunal será obligatoria para el Pleno y sus Salas. También estarán obligadas a su observancia las autoridades administrativas sometidas a su jurisdicción. Cuando se invoquen tesis jurisprudenciales de este órgano, deberán proporcionarse los datos suficientes para su identificación y verificación.

Cuando alguna Sala o autoridad administrativa, dicte o ejecute un acto contraviniendo una tesis jurisprudencial, el Tribunal le solicitará un informe. Una vez confirmado el incumplimiento, el Pleno del Tribunal le aplicará los medios de apremio que establece esta Ley.

En caso de que el acto dé lugar a un juicio en los términos de la presente Ley, el Pleno del Tribunal deberá suspender el procedimiento mencionado en el párrafo anterior, hasta en tanto dicho juicio se resuelva en definitiva.

**ARTICULO 95 Bis.-** Cuando existan razones fundadas por las que se considere que deba interrumpirse la observancia del criterio sustentado en una tesis jurisprudencial, la autoridad administrativa y los particulares que



demuestren interés jurídico, podrán solicitar su revisión al Pleno del Tribunal.

Si se consideran procedentes las razones expuestas, el Pleno del Tribunal, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, resolverá la interrupción del criterio sustentado en la tesis jurisprudencial. Dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que constituyeron los precedentes de la tesis jurisprudencial.

El Pleno del Tribunal deberá dictar la resolución dentro de un plazo de treinta días y ordenar su publicación en los términos previstos por el artículo 97 de esta Ley. Si no se resuelve en dicho plazo, se suspenderá la aplicación de la tesis jurisprudencial.

**ARTICULO 96.-** La jurisprudencia perderá tal carácter, cuando el Pleno del Tribunal, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, pronuncie una resolución en contrario, debiendo expresarse en ellas las razones que motiven el cambio de criterio, las cuales deberán referirse a las que se tuvieron en consideración para establecerla.

Para la modificación de la jurisprudencia, se observarán las mismas reglas establecidas por esta Ley para su formación.

**ARTICULO 97.-** Las tesis jurisprudenciales que sustente el Tribunal, así como aquellas que sean relevantes a juicio del mismo y se considere conveniente su difusión, se publicarán en su órgano oficial y en el Periódico Oficial del Estado. Cada año se publicará, en el mes de Enero, la compilación de las tesis vigentes.

**ARTICULO 98.-** Los Magistrados de las Salas, al emitir las sentencias, deberán apegarse a los criterios jurídicos que hayan aplicado al resolver otros casos sobre la misma materia. Para modificarlos, deberán razonar detalladamente los motivos por los que se abandonan dichos criterios.

En caso de que existan criterios contradictorios sostenidos por diferentes Salas, cualquiera de los Magistrados o de las partes podrán solicitar al Pleno del Tribunal resuelva dicha contradicción, definiendo el criterio que deba imperar, mismo que tendrá el carácter de jurisprudencia, y que podrá ser interrumpida por nuevo criterio razonado en sentencia dictada

por el Tribunal en Pleno. Las resoluciones dictadas por el Pleno para dirimir las contradicciones de criterio entre las Salas, no modificarán las sentencias que hayan motivado la contradicción.

## **ARTICULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** La presente Ley entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Se abroga la Ley Orgánica de la Junta de Revisión Fiscal del Estado de Baja California.

**TERCERO.-** El Ejecutivo del Estado proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

**CUARTO.-** Los recursos administrativos que al entrar en vigor la presente Ley, estén pendientes de resolución, serán tramitados conforme a las disposiciones vigentes al momento de su interposición, pero las resoluciones tendrán carácter de sentencia, en los términos de este Ordenamiento.

**DADA** en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

DECRETO No. 145 DE REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 1999.

Fé de Erratas al Decreto número 145, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de julio del 2000.

(Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado del 31 de enero de 1989).

# **REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Fecha 30 de Septiembre de 1991)

## **INDICE**

### **CAPITULO PRIMERO**

Disposiciones Generales .....

### **CAPITULO SEGUNDO**

Del Pleno .....

### **CAPITULO TERCERO**

Del Presidente del Tribunal .....

### **CAPITULO CUARTO**

De las Salas .....

### **CAPITULO QUINTO**

Del Personal del Tribunal .....

### **CAPITULO SEXTO**

Del Trámite de Asuntos .....

**TRANSITORIOS** .....

# **REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO**

## **CAPITULO PRIMERO**

### **DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTICULO 1o.-** El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California se rige por las disposiciones contenidas en la Constitución General de la República, Constitución Política del Estado de Baja California, Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el presente reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

**ARTICULO 2o.-** El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

**ARTICULO 3o.-** El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se integra por tres Magistrados Propietarios y los Suplentes que sean necesarios para su funcionamiento. Cuenta además con una Secretaría General de Acuerdos y una Unidad de Apoyo Administrativo.

Para ejercer sus funciones en Salas, éstas se integran con un Magistrado Propietario, asistido de los Secretarios Auxiliares, Actuarios y demás personal administrativo que requiera el servicio.

La Presidencia del Tribunal y la Unidad de Apoyo Administrativo contarán con el personal técnico y administrativo necesarios para el desempeño de sus funciones.

**ARTICULO 4o.-** El Tribunal podrá instalar oficinas auxiliares de las Salas en las poblaciones de su jurisdicción cuando, a juicio del Pleno, se considere conveniente por razón de la distancia en que se encuentre ubicada la Sala de conocimiento correspondiente con relación a la población de que se trate.

**ARTICULO 5o.-** El horario de labores en el Tribunal será de las 8:00 a las 15:00 horas de todos los días hábiles; éstos horarios podrán modificarse por el Pleno del Tribunal, según las necesidades del servicio.

**ARTICULO 6o.-** Son hábiles todos los días del año, menos los sábados y domingos, los que señale el Calendario Oficial del Tribunal y los que excepcionalmente determine el Pleno del Tribunal.

**ARTICULO 7o.-** El Calendario Oficial del Tribunal se publicará en el Boletín del Tribunal y en el Periódico Oficial. del Gobierno del Estado.

**ARTICULO 8o.-** Las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este Reglamento, serán resueltas por el Pleno del Tribunal.

## **CAPITULO SEGUNDO**

### **DEL PLENO**

**ARTICULO 9o.-** Las sesiones del Pleno de carácter ordinario se llevarán a cabo con la periodicidad que requiera el cúmulo de asuntos de su competencia, a convocatoria previa del Presidente o de los integrantes del Pleno en su conjunto. Tienen el carácter de extraordinarias las sesiones que se celebren para la elección del presidente, aprobación del presupuesto anual del Tribunal y otras de carácter urgente a juicio y previa convocatoria del Presidente.

**ARTICULO 10.-** Los recursos de revisión serán distribuidos por el Presidente del Tribunal en igual número entre los Magistrados que integran el Pleno, para la formulación del proyecto de resolución tomando en cuenta las particularidades y precedentes para cada caso.

La disposición anterior se observará en lo conducente, en los demás asuntos de la competencia del Pleno.

**ARTICULO 11.-** En el caso de que uno de los Magistrados no esté de acuerdo con la determinación de la mayoría del Pleno, podrá formular voto particular razonado, mismo que correrá agregado a la resolución correspondiente.

**ARTICULO 12.-** El Pleno del Tribunal vigilará el debido funcionamiento de las Salas, incluyendo a sus oficinas auxiliares, autorizando a uno de sus integrantes para que practique visitas de inspección a las mismas.

Las visitas serán ordinarias y extraordinarias y se realizarán dentro del horario

normal de labores.

Se practicará visitas ordinarias cada cuatro meses en la fecha que determine el Pleno. Se llevarán a cabo visitas extraordinarias cuando así lo acuerde el Pleno, por algún motivo especial o para mejorar el funcionamiento de la Sala correspondiente.

**ARTICULO 13.-** El Magistrado Visitador, cuando practique visitas ordinarias a las Salas, examinará los expedientes de los juicios y recursos tramitados en el período, para constatar que se encuentran debidamente integrados, foliados, sellados y rubricados y se asegurará de que las resoluciones, audiencias, notificaciones, diligencias y demás actuaciones se hayan formulado o ejecutado en tiempo y forma, conforme a las disposiciones legales aplicables.

En las visitas extraordinarias sólo se examinarán los documentos y datos relacionados con su objeto.

**ARTICULO 14.-** El Magistrado Visitador hará constar en el acta de la visita ordinaria la fecha en que se efectúa la misma, el período que comprende, las observaciones sobre el cumplimiento de los plazos y formalidades legales, así como las recomendaciones que se formulen al personal de la Sala respectiva. Cada acta será firmada por el Magistrado Visitador, Magistrado de la Sala visitada y Secretario Auxiliar, quienes conservarán una copia del acta y el original se hará del conocimiento del Pleno. Las indicaciones anteriores se observarán en lo conducente en las actas de las visitas extraordinarias.

**ARTICULO 15.-** El Pleno llevará los libros de actas, recursos, amparos, registro de poderes y nombramientos, oficios y demás que sean necesarios para la adecuada atención del servicio. Estos libros estarán bajo responsabilidad del Secretario General de Acuerdos.

**ARTICULO 16.-** Corresponde al Pleno admitir las renunciaciones de sus integrantes y demás servidores públicos del Tribunal y resolver lo conducente.

## **CAPITULO TERCERO**

### **DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL**

**ARTICULO 17.-** Corresponde al Presidente del Tribunal:

I.- Elaborar y someter a la consideración del Pleno los manuales administrativos y de procedimientos para el adecuado funcionamiento del Tribunal, así como los formatos de demanda de juicio contencioso administrativo.

II.- Elaborar y someter a la consideración del Pleno el Calendario Oficial del Tribunal.

III. Designar cuando proceda a los Magistrados de guardia, según el turno que para tal efecto lleve la Secretaría General.

IV. Conferir a los Magistrados las comisiones y representaciones del Tribunal que estime pertinentes.

**ARTICULO 18.-** El Presidente del Tribunal podrá conceder licencias al personal de confianza, hasta por cinco días al año con goce de sueldo, previa opinión del Magistrado de la Sala que corresponda. Las licencias se concederán siempre que se trate de enfermedades, atenciones graves de familia y otras causas debidamente justificadas.

**ARTICULO 19.-** Para cubrir las faltas temporales de integrantes del personal de confianza, el Presidente del Tribunal designará a los servidores públicos del mismo, siempre que reúnan los requisitos legales respectivos.

**ARTICULO 20.-** Concluido el plazo de una licencia de personal de confianza, si no se presenta el interesado al desempeño de sus labores dentro del plazo de tres días hábiles, el Presidente del Tribunal declarará vacante el cargo para los efectos de hacer nuevo nombramiento.

## **CAPITULO CUARTO**

### **DE LAS SALAS**

**ARTICULO 21.-** Cada una de las Salas y oficinas auxiliares llevarán un libro para anotar el estado procesal de los asuntos radicados; un libro de

registro de poderes y nombramientos; un libro de correspondencia, y los demás que sean necesarios para la adecuada atención del servicio. Estos libros estarán bajo la responsabilidad del Secretario Auxiliar correspondiente.

**ARTICULO 22.-** Los Magistrados de las Salas informarán oportunamente al Presidente al fin de cada mes y del año, los datos estadísticos de los asuntos de su competencia y las ejecutorias importantes que hubieren emitido. Lo propio informarán los Secretarios Adscritos a las oficinas auxiliares correspondientes, al Magistrado de la Sala respectiva.

**ARTICULO 23.-** Las Salas del Tribunal llevarán por duplicado los expedientes de los juicios de su competencia.

## **CAPITULO QUINTO**

### **DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL**

**ARTICULO 24.-** Son servidores públicos de confianza en el Tribunal, el Secretario General de Acuerdos; los Secretarios Auxiliares, el Jefe de la Unidad Administrativa y los Actuarios.

**ARTICULO 25.-** Corresponde a la Secretaría General de Acuerdos:

- I. Coordinar la prestación del servicio social de los pasantes asignados por la Universidad Autónoma de Baja California.
- II. Llevar el turno de los Magistrados de guardia.
- III. Proyectar los informes que deba rendir el Pleno del Tribunal en los juicios de amparo en que éste sea parte

**ARTICULO 26.-** Corresponde a los Secretarios Auxiliares adscritos a las Salas:

- I .Cuidar que los expedientes de la Sala de su adscripción sean debidamente foliados, sellados y rubricados.
- II. Llevar un libro de control en el que se asiente los asuntos que se turnan al actuario, precisando la fecha de entrega y fecha en que sean devueltos por el actuario.



II. Expedir y certificar constancias que obren en los expedientes de los juicios radicados en la Sala de su adscripción.

**ARTICULO 27.-** Para ser Jefe de la Unidad Administrativa se requiere:

- I. Ser mexicano en uso de sus derechos civiles y políticos.
- II. Poseer título Profesional de Contador Público o Licenciado en Administración Pública, legalmente registrado.
- III. Ser de notoria buena conducta y con experiencia en el área técnica correspondiente.
- IV. No haber sido condenado por delito intencional.

**ARTICULO 28.-** Corresponde al Jefe de la Unidad Administrativa:

- I. Administrar los recursos humanos y financieros del Tribunal.
- II. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal y llevar el control del ejercicio del mismo.
- III. Tramitar ante las autoridades correspondientes la entrega oportuna del presupuesto autorizado del Tribunal.
- IV. Rendir por escrito un informe mensual y anual del ejercicio del presupuesto autorizado del Tribunal al Magistrado Presidente.
- V. Realizar las funciones de pagaduría al personal del Tribunal, efectuando los descuentos salariales que legalmente procedan.
- VI. Formular las requisiciones de material, mobiliario y equipo necesario para la buena marcha del Tribunal o, en su caso, efectuar su compra, previa autorización del Presidente del Tribunal.
- VII. Llevar y mantener al día un inventario de los bienes, enseres y equipo del Tribunal.

- VIII.- Contratar los servicios necesarios para el mantenimiento del edificio, instalaciones y equipo del Tribunal, previo acuerdo con el Magistrado Presidente.
- IX. Mantener al día el estado financiero del Tribunal con las pólizas, comprobantes, registros, asientos contables y demás requisitos de control y verificación del gasto.
- X. Tramitar las altas y bajas del personal del Tribunal, previo acuerdo con el Magistrado Presidente.

**ARTICULO 29.-** El jefe de la Unidad Administrativa dependerá administrativamente del Presidente del Tribunal y estará impedido para desempeñar cualquier otro cargo o empleo de la Federación, Estado y Municipio o de sus entidades públicas paraestatales, excepto los de carácter docente u honorífico.

**ARTICULO 30.-** Los integrantes del personal administrativo del Tribunal desempeñarán las labores que les encomienden sus superiores jerárquicos, en términos de las disposiciones legales aplicables.

**ARTICULO 31.-** Los peritos y demás auxiliares que requiera la administración de la justicia administrativa se listarán anualmente, previa autorización del Pleno, y se publicará dicha lista en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Boletín del Tribunal.

## **CAPITULO SEXTO**

### **DEL TRAMITE DE ASUNTOS**

**ARTICULO 32.-** La oficialía de partes central, ubicada en la sede del Tribunal, recibirá las promociones y correspondencia dirigida al Pleno, Presidencia y Primera Sala. Cada oficialía de partes de las Salas o de las Oficinas Auxiliares ubicadas fuera de la ciudad sede del Tribunal recibirá las promociones y correspondencia dirigida a las mismas y, además, actuará como oficialía de partes auxiliar del Pleno, para efectos de la recepción de promociones dirigidas al Pleno a la Presidencia. Una vez que se registren las promociones y correspondencia en el libro respectivo, por riguroso orden

numérico, se turnarán o remitirán como corresponda en el mismo día si las circunstancias lo permiten, sin perjuicio de que en casos urgentes se dé aviso a la Presidencia por vía de telefax para los efectos que procedan.

**ARTICULO 33.-** Cuando la oficialía de partes se encuentre cerrada, sólo el Secretario General de Acuerdos o los Secretarios Auxiliares de las Salas u oficinas auxiliares que residan fuera de la Capital del Estado, podrán recibir personalmente las promociones correspondientes, aún en su domicilio, siempre que se trate de asuntos de término y se presenten el día de su vencimiento. Estas promociones se registrarán en el libro correspondiente, en la primera hora laborable del día hábil siguiente.

**ARTICULO 34.-** Los Actuarios de las Salas estarán autorizados para que, en auxilio de cualquiera de las otras Salas y del Pleno, puedan efectuar notificaciones de las resoluciones recaídas en los juicios radicados en las primeras, así como de las resoluciones emitidas por el Pleno, sin necesidad de requisitoria previa, debiendo anotarse en la razón correspondiente que el Actuario practica la notificación en esa capacidad y conforme al presente precepto.

**ARTICULO 35.-** En horas de atención al público, los particulares podrán hacer promociones por comparecencia en el expediente respectivo ante la fe del Secretario General de Acuerdos o del Secretario Auxiliar de la Sala correspondiente, con excepción de la demanda inicial, ampliación de la demanda e interposición de recursos.

**ARTICULO 36.-** El Secretario General de Acuerdos y el Secretario Auxiliar que corresponda, darán cuenta diariamente al Presidente del Tribunal o al Magistrado, según el caso, bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la presentación, con todos los escritos y documentos y promociones que formulen los interesados.

**ARTICULO 37.-** El Secretario General de Acuerdos, Secretario Auxiliar y Actuarios tendrán fe pública en todo lo relativo al ejercicio de sus atribuciones.

**ARTICULO 38.-** Los gobernados y autoridades podrán registrar los poderes notariales o nombramientos, respectivamente, en el libro de control a cargo de cualquiera de las Salas del Tribunal, para el efecto de acreditar su personalidad en los juicios y recursos en que intervengan. Se registrarán de oficio las resoluciones definitivas que los organismos competentes

formulen respecto de la elección popular de servidores públicos locales. En caso de duda, la Sala de conocimiento solicitará se le remita certificación del registro respectivo.

**ARTICULO 39.-** Los originales de los expedientes concluídos se conservarán en el archivo interno de cada Sala. Los duplicados de dichos expedientes serán destruídos bajo la supervisión del Magistrado Numerario correspondiente.

## **CAPITULO SEPTIMO**

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Tribunal.

**ARTICULO 40.-** Las responsabilidades de todos los servidores públicos del Tribunal, se regirán por el Título Octavo, Capítulo Unico de la Constitución Política del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en lo que resulte conducente. Para estos efectos, las facultades en la materia, se entenderán atribuidas a la Comisión de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

Los Magistrados del Tribunal, solo podrán ser removidos de sus cargos, en los términos de la Constitución Política del Estado y de la Ley del Tribunal.

**ARTICULO 41.-** La Comisión de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es el órgano del Tribunal, en lo que a la materia se refiere y en lo relativo a vigilancia y disciplina, en los términos de este Reglamento.

**ARTICULO 42.-** La Comisión de Responsabilidades y Situación Patrimonial, se integrará por todos los Magistrados del Tribunal, y será presidida por el Magistrado que se designe por mayoría de votos de sus integrantes en la Primera Sesión de Pleno del Tribunal cada año. La Comisión será de carácter permanente y sesionará en las oficinas sede del Tribunal, cuantas veces sea necesario.

El Titular de la Unidad Administrativa, fungirá como Secretario de la Comisión y asistirá a las sesiones de la Comisión con voz, pero sin voto.

**ARTICULO 43.-** Para que la Comisión sesione válidamente, será necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes.

Los miembros de la Comisión no podrán abstenerse de votar, salvo el caso de excusa, o impedimento legal.

Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por unanimidad o por mayoría de sus integrantes. El miembro de la Comisión que disintiere de la mayoría, podrá formular voto particular, dentro del término de cinco días hábiles.

Las sesiones de la Comisión serán de carácter privado.

**ARTICULO 44.-** La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Actuar como instancia receptora de quejas y denuncias por conducto de su Presidente.

II.- Practicar las diligencias necesarias para la investigación de las quejas y denuncias, por quien o quienes sean designados por la Comisión.

III.- Imponer los correctivos disciplinarios y las sanciones administrativas, en los términos del presente Reglamento.

IV.- Aprobar los formatos para las declaraciones de situación patrimonial.

V.- Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial de los servidores del Tribunal, por conducto de su Secretario.

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Este Reglamento deberá publicarse en el Boletín del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para su difusión.

**LIC. FRANCISCO POSTLETHWAITE D.  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO  
Rúbrica**

**LIC. JORGE ADOLFO GONZALEZ FONCE**  
**MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES**  
Rúbrica

**LIC. MARIA AURORA LACAVEX BERUMEN**  
**MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES**  
Rúbrica

**LIC. MARTHA I. SOLENO ESCOBAR**  
**SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**  
Rúbrica

ACUERDO DE REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADO EN EL PERIODICO  
OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2001.

#### **IV.- JURISPRUDENCIA VIGENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

(Publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 6 de mayo de 2005, páginas 34 a la 42).

##### **JURISPRUDENCIA 1**

**MULTAS.- AUTORIDAD INCOMPETENTE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEPENDIENTE DEL XIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI PARA APLICARLAS EN MATERIA DE ASEO PUBLICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.- NULIDAD.** En efecto, las multas impuestas por la Dirección de Obras y Servicios Públicos dependiente del XIII Ayuntamiento de Mexicali, con respecto a la aplicación del Reglamento de Aseo Público y Protección al Ambiente, son nulas, habida cuenta que dicha autoridad no aparece existente como órgano de gobierno dentro de la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California; y en cuanto al Reglamento Interior, en el que la autoridad pretende fundar sus facultades de imperio, emanó expresamente de la Ley Orgánica Municipal de fecha 29 de diciembre de 1953, que fue abrogada por la ley vigente y sin que ésta última contenga ninguna disposición para mantener en vigor el referido reglamento, quedando éste por tanto, también abrogado. Consecuentemente, devienen nulos los actos del inspector dependiente de dicha dirección; todo ello con fundamento en el artículo 83 fracción I de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 07/90. Resuelto en Sesión de Pleno del 3 de septiembre de 1990, por unanimidad de 3 votos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 06/90. Resuelto en Sesión de Pleno del 3 de septiembre de 1990, por unanimidad de 3 votos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 17/90. Resuelto en Sesión del Pleno del 26 de octubre de 1990, por unanimidad de 3 votos.

## **JURISPRUDENCIA 2.**

**INTERPRETACION JURIDICA DEL ARTICULO 151-13 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO.** Ciertamente, el segundo párrafo del artículo 151-13, inciso b ), relaciona textualmente la excepción a que se refiere este artículo con el denominado "inciso anterior", que es el que menciona la exportación de bienes y servicios. Sin embargo, es de hacer notar que en el propio segundo párrafo del inciso b), se establece que dicha excepción sólo será aplicable respecto de los pagos que se efectúen durante los dos primeros años de haber iniciado operaciones de maquila para exportación y esta actividad se encuentra regulada exclusivamente, para los efectos de la excepción al hecho imponible, en el mismo inciso b). Además, si bien es cierto que las normas de derecho tributario son de aplicación estricta, esto no significa una interpretación restrictiva de un precepto aislado, sino que deberá aplicarse integralmente todo el derecho que le atañe a la contribución de que se trate, mediante una interpretación jurídica sistemática. En tal sentido, el artículo tercero transitorio del decreto expedido por la legislatura local, mediante el cual se adicionó el citado artículo 151-13, corrobora sin lugar a dudas que la temporalidad de la excepción al hecho imponible se refiere a las actividades señaladas en el propio inciso b), esto es, a las operaciones de maquila para exportación, en los términos de la legislación aduanera, no obstante que textualmente se refiere al inciso anterior; ya que si el legislador hubiera querido vincular dicha temporalidad de la excepción a las actividades señaladas en el inciso a) no tendría porque establecer obligación alguna a aquellas que se encuentran ubicados en el inciso b) puesto que el contenido del primer párrafo de este inciso no sufrió modificación sustancial y la naturaleza de los transitorios es precisamente regular la transición de la nueva situación jurídica creada por la reforma.

Juicio Contencioso Administrativo 01/90.- Matsushita Industrial de Baja California, S. A. De C.V. ejecutoria de fecha 31 de mayo de 1990. Primera Sala.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 05/90.- Resuelto en Sesión de Pleno del 3 de septiembre de 1990, por unanimidad de votos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 20/90. Resuelto en Sesión de Pleno del 26 de octubre de 1990, por unanimidad de votos.

## **JURISPRUDENCIA 3.**

### **IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y TRANSMISION**



**DE DOMINIO. ACTO ADMINISTRATIVO DE NO APROBACION DE AVALUO, NULIDAD.** Si bien es cierto que de conformidad con las Leyes de Hacienda y de Ingresos Municipales, la autoridad Municipal en uso de su facultad para comprobarla veracidad de los datos de las declaraciones del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Transmisión de Dominio, después de que se haya formulado la liquidación y pagado el gravamen, puede ordenar la práctica de un nuevo avalúo, en los términos de Ley, para tornarlo como base del impuesto, también lo es, que en observancia a las garantías constitucionales de legalidad y audiencia, dicha autoridad debió conceder al particular la oportunidad de conocer los motivos y fundamentos que tuvo para rechazar el avalúo presentado por el mismo, así como los términos del nuevo avalúo practicado por la autoridad, con base en el cual se cuantificó el impuesto en cuestión a cargo del contribuyente, a efecto de no vulnerar el principio de certidumbre que rige la materia tributaria y consecuentemente su derecho a la defensa.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 19/90. Resuelto en Sesión del Pleno de fecha 26 de octubre de 1990, por unanimidad de tres votos. Magistrado Ponente María Aurora Lacavex B.

Juicio Contencioso Administrativo 63/90. María Magdalena Cortéz Villapudúa. Ejecutoria de fecha 9 de enero de 1991. Primera Sala. Magistrado Francisco Postlethwaite.

Juicio Contencioso Administrativo 64/90 María Magdalena Villapudúa Sánchez. Ejecutoria de fecha 9 de enero de 1991. Primera Sala. Magistrado Francisco Postlethwaite.

#### **JURISPRUDENCIA 4.**

**AUTORIDADES. SU REPRESENTACION PARA COMPARECER EN JUICIO NO ES ADMISIBLE.** En efecto, en el juicio contencioso administrativo no es admisible que las autoridades comparezcan mediante representante legal, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracciones I y II inciso A) de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la litis en el juicio contencioso administrativo se fija entre el demandante y las autoridades demandadas, por los actos que específicamente se les imputa a cada una de las demandadas, mismas que a su vez, en base al emplazamiento, adquieren la carga de contestar por sí mismas los actos que se le atribuyen. Lo anterior, con excepción de los Ayuntamientos, como órgano colegiado, quienes sí pueden ser representados en juicio por el Síndico Municipal, en los términos de la Legislación Municipal Aplicable.

Juicio Contencioso Administrativo 32/90. David Octavio Carrasco García. Vs, Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Mexicali. Resolución emitida por la Primera Sala con fecha 20 de septiembre de 1990, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 10 de enero de 1991, por unanimidad de votos.

Juicio Contencioso Administrativo 45/90. Angel Sánchez Wong vs. Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Mexicali. Resolución emitida por la Primera Sala con fecha 3 de octubre de 1990, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 28 de febrero de 1991, por unanimidad de votos.

Juicio Contencioso Administrativo 46/90. José Gilberto Forte Ríos. Resolución emitida por la Primera Sala, con fecha 3 de octubre de 1990. Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 29 de enero de 1991, por unanimidad de votos.

## **JURISPRUDENCIA 5**

**RECIBO POR CONSUMO DE AGUA. CONSTITUYE ACTO ADMINISTRATIVO DE MOLESTIA IMPUGNABLE EN JUICIO. PARA SU VALIDEZ Y EFICACIA DEBE ESTAR FUNDADO.** La manifestación que hace la autoridad demandada en el sentido de que dicho "recibo" no configura un acto administrativo impugnabile en juicio por no contener un mandamiento de autoridad que requiera estar fundado y motivado, y que sólo es una notificación de adeudos sin efectos ejecutivos, es inexacta por lo siguiente: En primer término, para efectos de su impugnación en juicio contencioso administrativo de plena jurisdicción, como el que nos ocupa, basta para autorizar su examen que se trate de un acto o resolución del género administrativo emanado unilateralmente de cualquier órgano de la administración pública estatal o municipal, que contenga una determinación dirigida a obtener una conducta de su destinatario, cuya omisión eventual le traiga aparejada consecuencias gravosas a su interés. Es el caso que el documento aludido reúne dichos extremos, al señalar en forma líquida una cantidad de dinero a pagar por concepto del consumo y servicio prestado, determinada unilateralmente por la autoridad y fijándosele un plazo de vencimiento para su pago. En segundo lugar, si bien es cierto que dicho documento no tiene formalmente los elementos de un mandamiento con efectos ejecutivos, cierto es también, que materialmente entraña una determinación y liquidación de derechos por consumo de agua, lo que conforme al artículo 22 de la Ley Estatal de las Comisiones de Servicios Públicos de Baja California, constituye un crédito fiscal, mismo que al notificarse mediante entrega del susodicho documento, incide en la esfera jurídica del gobernado con efectos vinculatorios, habida cuenta que por un lado, de no pagarse en el plazo legal, necesariamente le producirá los

efectos legales de la mora, que entre otros, son los recargos, como lo señalan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Agua Potable en el Estado de Baja California, sin perjuicio de la reducción del servicio; y por otro lado, de no inconformarse contra la lectura del consumo medido, contenido en el precitado documento, se tendrá como definitiva, de conformidad con el artículo 63 de ese mismo ordenamiento legal. De donde se concluye que el mal llamado recibo no es simplemente la notificación de adeudo, como lo afirma la demandada, sino que es en realidad jurídica un acto administrativo que vincula a su destinatario a conducirse en forma determinada, causándole así una molestia al mismo y que por consiguiente para su validez y eficacia jurídica no sólo debe estar motivado, sino también fundado, en cumplimiento del artículo 16 constitucional en concordancia con el 83 fracción II de la ley de este Tribunal.

Juicio Contencioso Administrativo 08/89 Universidad Nacional Autónoma de México vs Secretaría de Finanzas del Estado y otras autoridades. Ejecutoria emitida por la Primera Sala, de fecha 25 de mayo de 1990.

Juicio Contencioso Administrativo 18/991. Hielo Alaska, S.A. vs Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y otras autoridades. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 29 de mayo de 1991, confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 31 de julio de 1991, por unanimidad de votos.

Juicio Contencioso Administrativo 65/991. Hielo Alaska, S.A. vs Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y otras autoridades. Ejecutoria emitida por la Primera Sala, de fecha 2 de diciembre de 1991.

## **JURISPRUDENCIA 6**

**LEGITIMACION PROCESAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS NO ESTAN OBLIGADAS A EXHIBIR EN JUICIO EL NOMBRAMIENTO QUE LA ACREDITE.** De conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la legitimación pasiva en el juicio contencioso administrativo corresponde a los órganos de autoridad responsables del acto impugnado, no así a las entidades públicas correspondientes (Estado o Municipio), dado que es justamente el órgano de autoridad que representa al Estado o Municipios, el que está sometido a la jurisdicción por virtud de su actuación, habida cuenta que lo importante y trascendente para el enjuiciamiento de los actos administrativos es la obligación del sujeto con respecto a la emisión, ordenamiento o ejecución del acto impugnado.

En tal sentido, de conformidad con el artículo 52, in fine, de la ley mencionada, interpretado a contrario sensu, se desprende que las autoridades demandadas no están obligadas a exhibir el nombramiento que acredite su personalidad, ya que dicho nombramiento se refiere a su legitimación de origen. Por lo tanto, basta señalar en la demanda a la autoridad responsable del acto impugnado, para que su legitimación procesal se le admita, sin perjuicio de que se combata dicha legitimación pero únicamente por lo que hace a su existencia legal o a su competencia como autoridad que le deviene de la ley para emitir, ordenar o ejecutar el acto reclamado, en cuyo caso se trata de una autoridad incompetente.

Juicio Contencioso Administrativo 64/991. Teléfonos del Noroeste, S.A. DE C.V. vs. Procuraduría Fiscal del Estado y Otras autoridades. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 13 de enero de 1992. Magistrado Francisco Postlethwaite D., confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 12 de mayo de 1992, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jorge Adolfo González Fonce.

Juicio Contencioso Administrativo 68/991. Carlos Arsenio Romero Gómez Vs. Secretario del Ayuntamiento de Mexicali, sentencia emitida por la Primera Sala de fecha 17 de febrero de 1992. Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 1ro. de junio de 1992, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Aurora Lacavex Berumen.

Juicio Contencioso Administrativo 9/991 O.T. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. Vs. Procuraduría Fiscal del Estado y Otras autoridades. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 10 de abril de 1992, Magistrado Francisco Postlethwaite D., confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 19 de agosto de 1992, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Isaias Quezada Ramos.

## **JURISPRUDENCIA 7**

**RECAUDADOR AUXILIAR ADSCRITO AL CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICALI. ES INCOMPETENTE PARA INSTAURAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.** En efecto, el Recaudador Auxiliar de Rentas Municipal adscrito al Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali, es incompetente para instaurar el procedimiento administrativo de ejecución, habida cuenta que del examen de los ordenamientos jurídicos siguientes: Ley de Hacienda Municipal del Estado, Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado y Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali; no aparece que el órgano de autoridad demandado Recaudador Auxiliar de Rentas

Municipal adscrito al Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali, tenga existencia legal, de donde le deviene su incompetencia para incoar el referido procedimiento económico coactivo.

Juicio Contencioso Administrativo 62/992. Raúl Fiqueroa Pérez Vs. Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali y otra autoridad. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 14 de octubre de 1992, Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 18 de enero de 1993, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente. María Aurora Lacavex Berumen.

Juicio Contencioso Administrativo 84/992. Rafael Camarillo Juárez Vs. Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali y otra autoridad. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 2 de noviembre de 1992, Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 18 de enero de 1993, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente María Aurora Lacavex Berumen.

Juicio Contencioso Administrativo 85/992. Hector Ortíz González Vs. Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali y otra autoridad. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 30 de octubre de 1992, Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 18 de enero de 1993, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente María Aurora Lacavex Berumen.

## **JURISPRUDENCIA 8**

**INCOMPETENCIA CAUSAL DE. EL TRIBUNAL ES INCOMPETENTE PARA CONOCER EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS.** Habiendo quedado demostrado en autos que el acto impugnado se originó por el ejercicio de facultades en materia de impuestos federales coordinados, como lo es el Impuesto al Valor Agregado, es de observarse que la autoridad fiscal demandada actuó con el carácter de autoridad fiscal federal, en los términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; por consiguiente, resulta que la controversia planteada se suscitó entre el demandante y una autoridad federal, con lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 40, fracción I de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por ser incompetente este Tribunal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 22 de la ley que rige a éste órgano jurisdiccional.

Juicio Contencioso Administrativo 3/993. Carlos Saul Pinto Vargas vs. Recaudación de Rentas del Estado y otras autoridades. Ejecutoria pronunciada por la Primera Sala, con fecha 9 de marzo de 1993. Magistrado Francisco Postlethwaite D.

Juicio Contencioso Administrativo 4/993. Eduardo Manuel Martínez Angel vs. Recaudación

de Rentas del Estado y otras autoridades. Ejecutoria pronunciada por la Primera Sala con fecha 9 de marzo de 1993. Magistrado Francisco Postlethwaite D.

Juicio Contencioso Administrativo 18/993 O.T. Radio Cuchuma, S.A. vs. Recaudación de Rentas del Estado y otras autoridades. Ejecutoria pronunciada por la Primera Sala con fecha 11 de agosto de 1993. Magistrado Francisco Postlethwaite D.

## **JURISPRUDENCIA 9.**

**IMPUESTO PREDIAL. ES OBLIGACION DEL CONTRIBUYENTE DETERMINARLO Y PAGARLO MEDIANTE DECLARACION.** De la interpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos 75 Bis A de la Ley de Hacienda Municipal del Estado; 2º de las Leyes de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, de 1991, 1992 y 1993; 105 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, y 18 de la Ley de Catastro del Estado; se deduce que es obligación de los contribuyentes efectuar el pago del Impuesto Predial mediante la presentación de la declaración correspondiente, debiendo autodeterminar el impuesto a pagar aplicando como base el valor de sus predios conforme a la tabla de valores catastrales unitarios, misma que se hace del conocimiento de los particulares a través de su publicación anual en el Periódico Oficial del Estado.

La facultad de la autoridad catastral, contenida en el artículo 110, fracciones VI y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, consistente en la posibilidad de aplicar los valores unitarios y practicar la valuación de los predios en particular, debe considerarse como una atribución propia de la autoridad fiscal para corregir errores o subsanar omisiones del contribuyente en la determinación del impuesto a pagar, sin que ello implique la descarga para el particular de su obligación de pagar el Impuesto Predial mediante la presentación de la declaración correspondiente que contenga la autodeterminación del citado impuesto.

Juicio Contencioso Administrativo 19/993 O.T. Ana Lilia Reyes Pillado vs. Tesorero del Municipio de Tijuana, Baja California. Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 16 de agosto de 1993. Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 4 de noviembre de 1993.

Juicio Contencioso Administrativo 56/993 O.T. Inmuebles Normex, S.A. de C.V. vs. Recaudador de Rentas Municipal de Tijuana, Baja California. Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 4 de mayo de 1994. Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada por ejecutoria del Pleno de fecha 11 de agosto de 1994.

Juicio Contencioso Administrativo 14/994 O.T. Margarita Salazar vs. Recaudador de Rentas

Municipal de Tijuana, Baja California. Sentencia emitida por la Segunda Sala con fecha 27 de octubre de 1994. Magistrada María Esther Rentería Ibarra. Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 27 de febrero de 1995.

## **JURISPRUDENCIA 10**

**FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO IMPUGNADO. SU ESTUDIO ES INNECESARIO CUANDO A LA VEZ SE RECLAMAN VIOLACIONES A DISPOSICIONES LEGALES ORDINARIAS.** Resulta innecesario el estudio de la falta de fundamentación y motivación del acto impugnado, cuando la parte actora no se limita a invocar dicho agravio, sino que además hace valer la comisión de infracciones a leyes ordinarias, manifestándose sabedora de los fundamentos y motivos que las autoridades demandadas tomaron en consideración para emitir el referido acto, por lo que aún cuando el agravio de falta de fundamentación y motivación resultara fundado, no se lesionaría el interés jurídico de la demandante, en razón de que ésta tuvo conocimiento oportuno de dichos fundamentos y motivos, y en consecuencia, estuvo en posibilidad de impugnarlos, por lo que no se afectó su derecho de defensa, ni se le ocasionó agravio alguno.

Juicio Contencioso Administrativo 46/994 S.S. Alquiladora de Casas, S.A. de C.V. vs. Presidente Municipal de Ensenada, Baja California y Otras Autoridades. Ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala con fecha 23 de mayo de 1995. Magistrada María Esther Rentería Ibarra.

Juicio Contencioso Administrativo 49/994 S.S. Alquiladora de Casas, S.A. de C.V. vs. Presidente Municipal de Tijuana, Baja California y Otras Autoridades. Ejecutoria emitida por el Pleno, en fecha 31 de octubre de 1995, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Lic. Francisco Postlethwaite Duhagón.

Juicio Contencioso Administrativo 59/994 S.S. Alquiladora de Casas, S.A. de C.V. vs. Presidente Municipal de Tijuana, Baja California y Otras Autoridades. Ejecutoria emitida por el Pleno con fecha 31 de octubre de 1995, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Lic. Francisco Postlethwaite Duhagón.

## **JURISPRUDENCIA 11**

**COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).** Por disposición expresa de las fracciones XIII, del apartado

B, del artículo 123 y V, del 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de los cuerpos de seguridad, están excluidos de la determinación jurídica que considera la relación de servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de lo que ha de concluirse que la relación que guardan con la administración pública sigue siendo de naturaleza administrativa, y se rigen por normas también administrativas, de la Ley y Reglamentos que les corresponden, por tanto, la competencia corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por tratarse del Tribunal encargado de dirimir las controversias de carácter administrativo, que se susciten entre la administración pública y los particulares (Artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Baja California en relación con el 2 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado) por ser éste el más afín, de acuerdo con las facultades de que está investido, para conocer de la demanda relativa, ya que no existe disposición legal en este Estado que instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver este tipo de controversias, lo anterior, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Este criterio se ve fortalecido por diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, dentro de las que destacan las tesis jurisprudenciales números 24/1995 del Tribunal Pleno, 77/95 de la Segunda Sala y 23/96 de la Segunda Sala, publicadas en el Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Novena Época), página 43, correspondiente al mes de septiembre de 1995 la primera; la segunda en el mes de diciembre de 1995, páginas 290 y 291 y la tercera en el Tomo III, página 244, correspondiente al mes de junio de 1996, y aunque se refieren a policías del Estado de México y de San Luis Potosí, guardan analogía con lo que acontece en el Estado de Baja California y vienen a fortalecer el carácter administrativo de la relación que sostienen los agentes de seguridad pública con el propio Estado.

Juicio Contencioso Administrativo 11/997 S.S. Martín Sánchez Puerta vs. Procurador General de Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades. Sentencia emitida por la Segunda Sala, de fecha 20 de octubre de 1997. Magistrado Alberto Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 15 de enero de 1998, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jesús Arturo López Ramos.

Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. Juan Ambrocio Arce Soto vs. Procurador General de Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades. Sentencia emitida por la Segunda Sala de fecha 5 de junio de 1998. Magistrado Alberto Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 21 de septiembre de 1998, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jesús Arturo López Ramos.



Juicio Contencioso Administrativo 74/998 S.S. José Martín Estrada Gutiérrez vs. Procurador General de Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades. Sentencia emitida por la Segunda Sala de fecha 5 de octubre de 1998. Magistrado Alberto Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 15 de febrero de 1999, por unanimidad de votos. Magistrada Ponente María Lourdes Luna Mendivil.

## **JURISPRUDENCIA 12**

### **COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA CONOCER DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS. INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 2 Y 22 DE LA LEY QUE LO RIGE.**

De conformidad con los artículos 2 y 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el Tribunal tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la Administración Pública Estatal, Municipal o sus Organismos Descentralizados y los particulares, mismos que pueden intentar el juicio contencioso administrativo contra actos o resoluciones de carácter administrativo, emanados de dichas autoridades, que les causen agravios. Y aún cuando literalmente los citados preceptos legales hacen referencia a los "particulares" afectados, debe interpretarse que en el caso de un servidor o exservidor público no le priva de su carácter de particular afectado para efectos de intentar el juicio contencioso administrativo en contra de la sanción que se le impuso, ya que tal sanción constituye un acto administrativo derivado de la potestad disciplinaria que la autoridad ejerce en forma supraordenada sobre una persona determinada y no sobre un ente público, produciéndole efectos jurídicos particulares en forma idéntica a la de cualquier particular gobernado, al margen de la estructura administrativa de la cual sea o haya sido parte. Sostener la interpretación contraria, conduciría al absurdo, jurídicamente inadmisibles, de que toda persona por el hecho de ser servidor público perdería los derechos subjetivos públicos de todo gobernado, entre los cuales se encuentra el de acceso a la jurisdicción, contenido en el artículo 17 Constitucional.

Juicio Contencioso Administrativo 45/991. Lourdes Baylón Grecco vs. Secretaría de la Contraloría General del Estado. Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 26 de septiembre de 1991, confirmada en Ejecutoria del Pleno de fecha 4 de diciembre de 1991, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jorge Adolfo González Fonce.

Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. Juan Ambrocio Arce Soto vs. Procurador General de Justicia del Estado y otra autoridad. Sentencia emitida por la Segunda Sala con

fecha 5 de junio de 1998, confirmada en Ejecutoria del Pleno de fecha 21 de septiembre de 1998, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jesús Arturo López Ramos.

Juicio Contencioso Administrativo 74/998 S.S. José Martín Estrada Gutiérrez vs. Procurador General de Justicia del Estado y otra autoridad. Sentencia emitida por la Segunda Sala con fecha 5 de octubre de 1998, confirmada en Ejecutoria del Pleno de fecha 15 de febrero de 1999, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente María Lourdes Luna Mendivil.

## **JURISPRUDENCIA 13**

**INTERES JURIDICO PARA IMPUGNAR ACTOS CONEXOS A ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO.** Si se reclaman actos o resoluciones administrativas que por sí mismos lesionan la esfera jurídica del demandante, por estar dirigidos a éste, argumentándose que no revisten la forma legal que impone el artículo 16 Constitucional, y en contra de los cuales se expresan agravios específicos, tendientes a lograr la declaración de su nulidad, ello es suficiente para que este Tribunal considere que dicho demandante tiene interés jurídico para impugnarlos y, por ende, bastante para analizar su legalidad, independientemente de que el gobernado cuente o nó con la licencia respectiva que lo autorice a ejercer tal o cual actividad reglamentada, salvo en los casos de que se trate de actos de autoridad que le impidan ejercer dichas actividades, pues la falta del permiso o licencia correspondiente, implica necesariamente la carencia de interés jurídico para impugnarlos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 16/999 S.S. Hipólito Otero Bolaños vs. Presidente Municipal de Tijuana y otra autoridad. Resuelto en Sesión de Pleno del 6 de septiembre de 1999, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Donaciano Romero Ortega.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 17/999 S.S. Samuel Lino Rodríguez vs. Presidente Municipal de Tijuana y otra autoridad. Resuelto en Sesión de Pleno del 6 de septiembre de 1999, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Donaciano Romero Ortega.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 19/999 S.S. Samuel Lino Rodríguez vs. Presidente Municipal de Tijuana y otra autoridad. Resuelto en Sesión de Pleno del 24 de septiembre de 1999, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos.

## **JURISPRUDENCIA 14**

### **CITATORIO PARA INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. REQUISITOS DE VALIDEZ.**

Atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, el citatorio que al efecto emita la autoridad competente, para efectos de la audiencia que da inicio formalmente al procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa en contra de determinado servidor público, deberá estar dirigido en forma personal y directa al presunto responsable, es decir, formulado individualmente, precisando en forma clara y precisa la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen en lo particular, en relación directa con los supuestos contenidos en el artículo 42 de la citada Ley, señalándosele el lugar en que se ponen a su disposición para imponerse de ellas, las pruebas existentes en su contra, para el efecto de que, dentro del término de ley, aporte los medios de convicción que estime convenientes para su defensa y poder también desvirtuar las probanzas de cargo; igualmente, en el citatorio de referencia deberá precisarse el derecho de ser asistido por un defensor, a ofrecer pruebas y expresar alegatos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 94/997 S.S. Nicolás Prado Iñiguez vs. Síndico Procurador de Tijuana y otra autoridad. Resuelto en Sesión de Pleno del 16 de julio de 1998, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. vs. Procurador General de Justicia del Estado y otras autoridades. Resuelto en Sesión de Pleno del 21 de septiembre de 1998, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 149/998 S.S. Norma Cueva Hueso vs. Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tijuana. Resuelto en Sesión de Pleno del 29 de noviembre de 1999, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos.

## **JURISPRUDENCIA 15**

**INHABILITACION SANCION DE. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA IMPEDIDA PARA FIJAR A SU ARBITRIO LA TEMPORALIDAD DE ESTA.** La autoridad administrativa se encuentra impedida para determinar a su arbitrio la temporalidad de la sanción de inhabilitación por faltas administrativas que no impliquen lucro o causen daños y perjuicios, a riesgo de incurrir en desvío de poder, por sustituirse al

legislador al adjudicarse la facultad de establecer el tiempo de duración de una sanción administrativa, en contravención al principio constitucional estrictamente aplicable al caso, que prohíbe imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, en este caso, a la infracción administrativa, toda vez que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, al establecer en su artículo 48, las sanciones aplicables por faltas administrativas, enuncia en su fracción VI, la sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, omitiendo precisar la temporalidad de dicha sanción, como sí lo hace en el párrafo siguiente, específicamente para el caso en que la falta administrativa implique lucro o cause daños y perjuicios.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 99/997 S.S. Elva Regina Jiménez Castillo vs. Contralor General del Estado y otras autoridades. Resuelto en Sesión de Pleno de fecha 16 de abril de 1998, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Lic. Jorge Adolfo González Fonce.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 100/997 S.S. Mireya Sáñez Pimentel vs. Contralor General del Estado y otras autoridades. Resuelto en Sesión de Pleno de fecha 16 de abril de 1998, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Lic. Jorge Adolfo González Fonce.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 49/999. Fernando Rosales Figueroa vs. Dirección de Control y Evaluación Gubernamental y otras. Resuelto en Sesión de Pleno de fecha 11 de diciembre del 2000, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Lic. Jesús Arturo López Ramos.

## **JURISPRUDENCIA 16**

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y CONTRALORÍA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. ES COMPETENTE PARA SUSTANCIAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES E IMPONER LAS MEDIDAS Y SANCIONES CORRESPONDIENTES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.-** En efecto, la Dirección General de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado es competente para sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad e imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado que incurran en las causas de responsabilidad establecidas en su ley orgánica, así como en las demás disposiciones legales

aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI, del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, ley específica, acorde a la interpretación de dicho precepto, dentro del contexto de la fracción XIII del apartado "B" del artículo 123 Constitucional, que establece que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 87/2000 S.S. Carlos Gil Gómez Guerrero Vs. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Resuelto en Sesión de Pleno del 3 de septiembre del 2001 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 45/2000 S.S. Rubén Beltrán Coronado Vs. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Otra. Resuelto en Sesión de Pleno del 17 de septiembre del 2001 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 18/2000 T.S. Jesús María García Talamantes Vs. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Otra. Resuelto en Sesión de Pleno del 1 de octubre del 2001 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.

## **JURISPRUDENCIA 17**

**REINSTALACION DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PROCEDENCIA DE LA.** El supuesto normativo que contempla la fracción XIII, del apartado "B", del artículo 123 Constitucional, reformado en marzo de 1998, establece que los miembros de las instituciones policiales podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa, para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. Por lo tanto, si el cese o remoción de un miembro de una institución policiaca se origina en una causa diversa a haber dejado de cumplir un requisito de permanencia, ante la nulidad del cese o remoción decretada en el juicio contencioso administrativo, es procedente condenar a la autoridad demandada a la reinstalación del policía, con apoyo en el artículo 84 de la Ley que rige a este Tribunal, el cual prevé que para salvaguardar el derecho del afectado, la sentencia que declare fundada la pretensión del actor dejará sin efectos el acto o resolución impugnada, fijando, además, los términos de la resolución que en su caso deba dictar la autoridad demandada y que tratándose de

sentencia de condena, se ordenará también a la autoridad demandada el hacer, el no hacer o el dar que correspondan, como consecuencia de la nulidad del acto o resolución impugnada.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 22/998. Osvaldo Breceda Yáñez y Otros Vs. Procuraduría General de Justicia del Estado y Otra. Resuelto en Sesión de Pleno del 9 de octubre del 2000 por Unanimidad de 3 Votos. Magistrado Ponente: Lic. Jorge Adolfo González Fonce.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 68/2000 S.S. Carlos Cosme Espinoza Vs. Director de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Resuelto en Sesión de Pleno del 8 de marzo del 2002 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 58/2001. Herman López Frank Vs. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Otra. Resuelto en Sesión de Pleno del 18 de octubre del 2002 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.

## **JURISPRUDENCIA 18**

**RECURSO DE REVOCACION PREVISTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO, ES IMPROCEDENTE SU DESECHAMIENTO SIN MEDIAR PREVENCIÓN DE REGULARIZACIÓN.** El artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado no establece como sanción por el incumplimiento del requisito formal de acompañar al escrito del recurso copia de la resolución impugnada y constancia de su notificación, la inadmisibilidad del recurso. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J.25/96 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, página 96, estableció que, aún cuando en la ley se establezca la sanción antes mencionada, si no se prevé la obligación de prevenir al impugnante para que regularice su recurso antes de tenerlo por no presentado, dicho ordenamiento atentaría contra la garantía de audiencia y rompería el equilibrio procesal entre las partes, al impedir al particular defenderse en contra del acto administrativo. Por consiguiente, es de concluir que el desechamiento del recurso de revocación establecido en el citado artículo 64, con motivo de la no exhibición de copia de la resolución impugnada y constancia de su notificación, sin haber mediado la prevención correspondiente al recurrente para que subsanara tal omisión, resulta legalmente improcedente.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 99/2000, Héctor Mendoza Benítez Vs. Contralor Interno de ISESALUD y Otra. Resuelto en Sesión de Pleno del 28 de mayo del 2002 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 89/2000, Miguel Valdivia Villaseñor Vs. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Resuelto en Sesión de Pleno del 18 de noviembre del 2002 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. María Lourdes Luna Mendívil.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 20/2002 T.S., Raúl Reyes Vidaña vs. Procurador General de Justicia del Estado y otra. Resuelto en Sesión de Pleno del 1 de marzo del 2004 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. Martha Irene Soleno Escobar.

**LIC. SANDRA IVETTE MONTAÑO CASTRO**  
SECRETARIA AUXILIAR ADSCRITA A LA TERCERA SALA

**LIC. ANA MARIA MORALES CORDOVA**  
SECRETARIA AUXILIAR ADSCRITA A LA TERCERA SALA

**LIC. ROSARIO ELENA PARADA PRIETO**  
ACTUARIO ADSCRITO A LA PRIMERA SALA

**LIC. PAJ'MI'RIS SA'AM RAZO SALCEDO**  
ACTUARIO ADSCRITO A LA PRIMERA SALA

**LIC. ELSA ARACELI ARANDA LOPEZ**  
ACTUARIO ADSCRITO A LA SEGUNDA SALA

**LIC. MAYERLING LUGO ORTIZ**  
ACTUARIO ADSCRITO A LA SEGUNDA SALA

**LIC. KARINA YANET SANDOVAL RANGEL**  
ACTUARIO ADSCRITO A LA TERCERA SALA

**C.P. BEATRIZ LUNA MENDIVIL**  
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

**C. GUILLERMO ESTEBAN GONZALEZ DE LA MORA**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**C. HERIC JOSE TORREROS VERDUGO**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Publicación Cuatrimestral, año 15, número 22. Publicación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. La edición consta de 1,500 ejemplares de distribución gratuita.



## **TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

### **MEXICALI**

AVE. PIONEROS Y ANAHUAC 1198  
CENTRO CIVICO Y COMERCIAL  
MEXICALI, B.C.  
TELS. Y FAX (01-686) 557-25-80  
557-25-20

### **TIJUANA**

GUILLERMO PRIETO No. 2980  
COL. GAVILONDO  
TIJUANA, B.C.  
TEL Y FAX (01-664)  
971-01-45 Y 971-01-46

### **ENSENADA**

CALLE 4TA. Y GRANADA 2063  
INTERIOR 102 y 103  
CENTRO COMERCIAL LAS  
PALMAS  
TEL. Y FAX (01-646)176-25-82  
173-43-64

